

Conflicto e (in)visibilidad

**Retos en los estudios
de la gente negra en Colombia**

Eduardo Restrepo – Axel Rojas
Editores



Editorial Universidad del Cauca
Colección Políticas de la alteridad

© Editorial Universidad del Cauca 2004

© De los autores

Grupo de Investigaciones para la Etnoeducación
Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Primera edición
Septiembre de 2004

Editores académicos:
Eduardo Restrepo y Axel Rojas

Editor General de Publicaciones:
Felipe García Quintero

Diseño y diagramación de la serie editorial:
Enrique Ocampo Castro

Copying Left

Los documentos de esta publicación pueden ser reproducidos total o parcialmente, siempre y cuando se cite la fuente y sean utilizados con fines académicos y no lucrativos.

Las opiniones expresadas en los documentos que componen esta publicación son responsabilidad de los (as) autores (as). La financiación de la publicación por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–, no significa coincidencia con los puntos de vista allí expresados.

ISBN: 958-9475-59-0

Impreso en Feriva, Cali, Colombia.

Contenido

Presentación	11
Agradecimientos	15
Introducción	
Eduardo Restrepo - Axel Rojas	17
Desplazamiento, conflicto y desterritorialización	33
Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas	
Ulrich Oslander	35
Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano	
Arturo Escobar	53
Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterrito- rialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multicul- turalismo’ de Estado e indolencia nacional	
Oscar Almario	73
Negándose a ser desplazados: afrocolombianos en Buenaventura	
Santiago Arboleda	121

Subalternización e (in)visibilidad	139
De la esclavitud al multiculturalismo: el antropólogo, entre identidad rechazada e identidad instrumentalizada	
Elisabeth Cunin	141
Subalternos entre los subalternos: presencia e invisibilidad de la población negra en los imaginarios teóricos y sociales	
Axel Rojas	157
No todos vienen del río: construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia	
Carlos Efrén Agudelo	173
El patriarca imposible: una aproximación a la subjetividad masculina afrocaribeña	
Julia Eva Cogollo - Juliana Flórez-Flórez - Angélica Nãñez	195
Presencia negra en la zona bananera del Magdalena: invisibilidad de una permanencia	
Cristian Manuel Olivero Pavajeau	209
Implosión identitaria y movimientos sociales: desafíos y logros del Proceso de Comunidades Negras ante las relaciones de género	
Juliana Flórez-Flórez	219
Políticas de la representación, multiculturalismo e interculturalidad	247
Los guardianes del poder: biodiversidad y multiculturalidad en Colombia	
Peter Wade	249
Biopolítica y alteridad: dilemas de la etnización de las colombias negras	
Eduardo Restrepo	271
Nuevas encrucijadas, nuevos retos para la construcción de la nación pluriétnica: el caso de Providencia y Santa Catalina	
Camila Rivera	301

**Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina:
construyendo etnoeducación e interculturalidad en la
universidad**

Catherine Walsh 331

Sobre los autores 347

Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multiculturalismo’ de Estado e indolencia nacional¹

Oscar Almario

¡Pacífico yo!, ¿Por qué no soy violento? Pobre de mí, si en mi cabeza no existe armamento.
Mi cuerpo y mis pies bailan, un canto alegre, que no tiene sentimiento!²

También queremos decirle a los paramilitares que sean honestos y digan la verdad al mundo, digan por qué nos quieren matar, pero que no nos calumnien diciendo que somos guerrilleros, pues esto nadie se los va a creer. En los cinco continentes ya saben quiénes somos los afrodescendientes y cuál es nuestro proceso de lucha en defensa de nuestro derecho ancestral. El mundo sabe que nosotros no somos cuerpo armado³

¹ Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz en Colombia”. Simposio N°.8, Procesos de guerra y paz en el litoral Pacífico. Coordinado por Jaime Arocha, convocado por la Universidad Nacional de Colombia y la Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET). Bogotá, 10 al 13 de septiembre de 2002. Publicado en *Los renacientes y su territorio. Ensayos sobre la etnicidad negra en el Pacífico colombiano* (Colección pensamiento político contemporáneo. Universidad Pontificia Bolivariana, Concejo de Medellín 2003)

² Fragmento del poema “¡Negro, tu Pacífico soy yo!” de Abraham Yip, Madrid (Buenaventura, octubre 7 de 1991).

³ Mensaje de Naka Mandinga, representante legal del Consejo Comunitario del río Yurumangüí, municipio de Buenaventura, diciembre 2 de 2001.

Si la guerra es la continuación de la economía por otros medios, como lo expresó el poeta Roque Dalton, en Colombia las armas independientemente de las manos en que estén, sirven para impulsar lógicas de sociedad y de desarrollo que distan mucho de las aspiraciones de los grupos étnicos⁴

Esta violencia [la de ex Yugoslavia] obliga también al historiador y al sociólogo a plantear la siguiente pregunta: ¿El uso de la crueldad en esta guerra, crueldad ilustrada por los crímenes contra la filiación y la sexualidad de las víctimas, es el signo de un último estertor del salvajismo ‘clásico’, constatado a lo largo de las guerras civiles, de las guerras de religión, de las guerras coloniales y racistas, esas guerras antaño sin cuartel; o, por el contrario, esa violencia es el signo de un uso específico, propiamente contemporáneo de la violencia, con un prometedor futuro político por ser lo suficientemente provechoso para el poder que lo pone en obra?⁵

Introducción

Recientemente, en un libro testimonial, Pierre Vilar, uno de los más notables historiadores contemporáneos, evocó unas imágenes imborrables para su memoria y que ahora resultan estremecedoras para todos. Esa experiencia, vivida durante la Segunda Guerra Mundial como miembro del ejército francés y prisionero de guerra de los alemanes, seguramente quedó registrada en su conciencia de manera ambigua, por su patriotismo, sensibilidad social y juventud, pero dejó su huella indeleble en él:

Los largos paseos a pie de las columnas de prisioneros le dan la oportunidad de verificar los primeros resultados de la derrota y de fijar en su espíritu algunos cuadros sobrecogedores: cadáveres de soldados negros con uniforme francés, símbolo del colonialismo, con la cabeza perforada y destrozada por una bala, símbolo del racismo nazi (Luna 2001:214).

En otras palabras, los soldados negros provenientes del mundo colonial (africano, asiático y americano), que combatían en el ejército francés contra el nazi-fascismo, estaban inscritos en una infernal cadena de racionalidades de la negación y la discriminación de la cual difícilmente

⁴ Carlos Rosero, miembro de la coordinación nacional del Proceso de Comunidades Negras, PCN (2002:550).

⁵ Véronique Nahoum-Grappe (2002:70).

podían escapar: la del *colonialismo* que los convertía literalmente en carne de cañón en la defensa de la grandeza de Francia y la del *racismo* del Eje que los discriminaba del resto de los vencidos y los hacía víctimas privilegiadas de su maquinaria de exterminio selectivo.

Hay que concluir que en dicho contexto, la *contemporaneidad* de la guerra mundial fue la que hizo posible reciclar, reorientar y potenciar las lógicas de guerra de los diferentes ejércitos que se sustentaban, tanto en uno como en otro caso, en el rechazo, desprecio y repulsión de otras poblaciones con base en principios raciales. La diferencia entre esa época y la actual consistiría en que, en el pasado, los ataques y guerras contra poblaciones civiles despreciadas se orientaban con criterios raciales, mientras que los que se realizan actualmente se llevan a cabo con criterios étnicos, sin olvidar el grado de ‘perfección’ y eficacia que alcanzan los discursos, mecanismos, dispositivos y tecnologías desplegados en el presente.⁶

En la Colombia de hoy se hace dolorosamente legible tanto la hondura de esta herencia de discriminaciones y horrores que ha caracterizado la historia de Occidente, como el alto grado de potenciación que han alcanzado los viejos prejuicios de ese imaginario colectivo, estimulados, redefinidos y exacerbados por la cultura de la guerra contemporánea, como se puede constatar en las acciones violentas que se adelantan especialmente contra la gente negra o afrodescendientes y otros grupos étnicos en el Pacífico colombiano y que constituyen un auténtico etnocidio-genocidio.

En efecto, la barbarie clásica no sólo no ha cesado, sino que después de más de medio siglo de ocurrido el último holocausto mundial al que se refiere el historiador francés, los holocaustos a escala que se han dado y se siguen dando en la periferia de los centros de poder del mundo y aún en el interior de estos (como en la ex Yugoslavia en pleno corazón de Europa), no son menos espantables, se repiten prácticamente a diario y nos alertan sobre lo anodino de cualquier discurso multiculturalista que no vaya precedido de una auténtica superación de estas heridas en el inconsciente colectivo y de una honesta y sincera decisión de los Estados y sociedades en su conjunto para respetar, aceptar y convivir con el Otro. La constatación que tal reconocimiento ha sido adoptado como política institucional y conducta colectiva debería enfocarse a evaluar las posibilidades efectivas de reproducción social, cultural y étnica que tienen estos grupos; así como en hacer viable

⁶ Tomo esta idea de lo expuesto por Véronique Nahoum-Grappe. (2002:70).

portados los medios posibles la expresión política de tal perspectiva, que no puede ser otra que el ejercicio real de la autonomía para controlar sus territorios, orientar sus comunidades, plantearse un desarrollo propio y negociar con el Estado y demás sectores de la sociedad y, aun con la comunidad internacional, los intereses comunes.

El objetivo central del presente artículo no es realizar un análisis estructural o institucional del conflicto armado colombiano; tampoco pretende un seguimiento pormenorizado de cada uno de sus actores, acciones y escenarios; por lo mismo, no arriesga hipótesis novedosas sobre las eventuales perspectivas del conflicto, ni formula específicamente alternativas posibles a emprender por parte del Estado o de la sociedad colombianos en las actuales circunstancias, aunque por lógica considera varios elementos que pertenecen a esas distintas dimensiones de la realidad y del análisis.

Su propósito es poner en común y en forma supuestamente razonada una sospecha: que términos como eventos violentos, acción de guerra, desplazamiento forzoso, desplazados o genocidio, más allá de su pertinencia general, mimetizan la verdadera dimensión de las cosas en el Pacífico colombiano y tienden, sin proponérselo, a ocultar que asistimos a un etnocidio; porque es a los afrodescendientes e indígenas a quienes se hace objeto de violencia y a quienes se desplaza y desterritorializa, con lo cual se cumple otra de las características de esta forma de violencia, *la limpieza étnica*.

El objetivo básico de estas notas es simple de enunciar, ya que es profundamente elusivo de concretar en lo cognitivo, y doloroso en lo emocional, por la velocidad, intensidad y complejidad de los acontecimientos y por el tremendo drama humano al que aluden, pero se puede esbozar a manera de preguntas. Admitido el condicionante conflicto armado y no obstante el contexto multiculturalista en el que se inscriben el Estado y la sociedad colombianos desde 1991, ¿por qué ha sido posible que ocurra ante los ojos de todos el horroroso y sistemático etnocidio-genocidio en el Pacífico?⁷ ¿O es que acaso se trata de considerar los acontecimientos que allí ocurren simplemente como partes de la cadena de eventos que suceden dentro de la ‘crisis humanitaria’ que definiría la situación nacio-

⁷ Sin atenuantes, como etnocidio-genocidio coinciden en caracterizar las comunidades étnicas y sus voceros, los académicos y las agencias internacionales de derechos humanos lo que ocurre en el Pacífico colombiano. Véanse las declaraciones de Naka Mandinga, representante legal del Consejo Comunitario del río Yummangüí, municipio de Buenaventura, del XI Encuentro de Pastoral Afrocolombiana reunido en Buenaventura, la comunicación de sectores académicos nacionales e internacionales al Presidente de la República, Andrés Pastrana y al vicepresidente Gustavo Bell.

nal?⁸ ¿O por el contrario, y como lo creen caracterizados dirigentes étnicos afrocolombianos e indígenas y lo experimentan sus comunidades, de lo que se trata en realidad es de que ‘alguien’ ha decretado el ataque directo a sus territorios, comunidades, organizaciones y procesos autonómicos?⁹ ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de palabras como *desplazados*, *desplazamientos*, *masacres*, *tomas* y que de repetirlas *ad nauseam*, por la dinámica del drama nacional y hasta por el hecho de que como éste se escenifica cotidianamente como parte de una nueva estética colectiva producida por la guerra, hemos vaciado de contenido, sentido y singularidad? ¿Qué lógicas específicas y diferenciadas son las están en movimiento en esta guerra, quiénes las implementan, contra quiénes van dirigidas, para producir qué tipo de situaciones, cuál es la relación que subyace a modalidades de violencia, víctimas y fines?¹⁰ ¿Se está incubando, por acción y omisión del Estado y la sociedad ante este etnocidio, una nueva y frustrante fractura en la ya secular cuestión de las relaciones entre etnias, Estado y nación en Colombia?¹¹

⁸ Este concepto de crisis humanitaria ha sido planteado por CODHES para significar la dimensión del conflicto colombiano. Aunque útil en ese sentido, visto desde la perspectiva étnica no resulta eficaz para comprender cabalmente la situación específica del Pacífico.

⁹ En su enérgica y digna denuncia, Naka Mandinga afirma que: “Desde hace más de un año los paramilitares, quienes sólo son un instrumento de la guerra que han decretado contra nosotros, vienen amenazándonos con incursionar contra nosotros si no abandonamos el río”

¹⁰ Eduardo Restrepo (2002:2) justifica una propuesta de documental sobre la situación del Pacífico, entre otras razones, precisamente porque su dinámica real ha quedado enmascarada: “Esta dimensión étnica de las dinámicas de la guerra y violencia en Colombia, ejemplificada claramente en la región del Pacífico, ha sido invisibilizada en las narrativas y análisis que circulan en los medios masivos de comunicación en el país y en el exterior”

¹¹ Carlos Rosero (2002:556-559), de PCN, que analiza brillantemente la encrucijada del movimiento étnico negro, se apoya en las lecciones de los mayores y de otros momentos históricos para deducir las actuales búsquedas y tareas de los afrodescendientes, cuya audacia política y mensaje de esperanza contrastan con las timoratas posiciones del Estado colombiano y la incompreensión de toda la sociedad para enfrentar la situación: una salida negociada al conflicto armado, prever y resistir las presiones crecientes sobre los territorios de las comunidades étnicas y simultáneamente identificar renovadas estrategias de negociación con el país nacional y, finalmente, mantener el norte de un proyecto propio, con capacidad organizativa para ejercer la autonomía. Sobre la cuestión de la relación entre etnias, Estado y nación para el caso mexicano, véase la perspectiva de Florescano (2001:394-405).

Este provisional y para nada exhaustivo sistema de preguntas reemplaza la convencional y académica exigencia de presentar los propósitos de una comunicación. Pero también, en mi caso, es una manera sincera de admitir que no estoy en condiciones de referirme a estos temas desde la seguridad de la certeza y mucho menos con una pretendida objetividad y neutralidad. Simplemente quiero recurrir a mi doble e inseparable expediente personal, como académico y ciudadano que ha optado por ser solidario con las luchas de los grupos étnicos del país, para reflexionar con libertad y abierto al diálogo sobre estos problemas.

Aunque por el título de estas notas se entiende que el ámbito de las mismas es el Pacífico colombiano en su conjunto, debo advertir que, por experiencia de vida e investigación, sus referencias más significativas remiten al Pacífico sur, es decir, a la región comprendida entre los ríos San Juan al norte de Buenaventura y Mataje al sur en la frontera con el Ecuador y la línea costera y la cordillera Occidental, es decir, a los actuales litorales de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para la elaboración de esta comunicación he tenido en cuenta datos de diversos trabajos de campo y visitas a la región realizados de manera continua desde 1995, intercambios y discusiones con amigos y colegas investigadores, información calificada de dirigentes étnicos, sociales y comunitarios del Pacífico sur. Por lo general, he optado por omitir los nombres de las personas que me aportaron información o testimonios por razones obvias.

Agradezco especialmente al antropólogo Eduardo Restrepo de la Universidad de Carolina del Norte por el intercambio de información y opiniones y a la Corporación Cívica Daniel Gillard (CECAN) de Cali y a su director ejecutivo, doctor José Alberto Tejada Echeverri, que ejecuta un proyecto de la Organización Internacional de Migraciones-OIM sobre desplazados en Buenaventura por la información, posibilidades de seguimiento y acceso al desarrollo de este proyecto.

Dos antecedentes históricos y de investigación y sus lecciones

Si hay algo que sobrecoja al extremo cuando de observar la geografía política de la guerra en Colombia se trata y en particular de la dinámica que ésta ha adquirido en territorios antes marginales a ella como el Pacífico, es la constatación de la sistemática y radical ampliación de su radio de operaciones e influencia en las últimas décadas. Pero resulta más impactante todavía, confirmar que en la medida que ese proceso expansivo de la guerra coincide con territorios étnicos específicos, sean

estos indígenas o negros, se profundizan y exacerban hasta extremos inimaginables todos los sentidos y dispositivos del racismo, el etnocidio y el terror que, al parecer, siempre han estado ahí, dormitando en lo más profundo de la conciencia colectiva de los colombianos. De esta manera, la guerra no ha hecho más que poner en escena lo que es una tragedia no superada ni exorcizada por nuestra cultura política y por el inconciente social: la negación y eliminación del otro.

La situación actual del Pacífico que aquí interesa destacar amerita considerar dos antecedentes históricos y de investigación con fines comparativos: las situaciones de violencia experimentadas en los territorios amazónicos en el tránsito del siglo XIX al XX y las de los años cincuenta de este último siglo.

Hace aproximadamente un siglo y durante las décadas inmediatamente siguientes, el panorama de Colombia en los territorios del Amazonas guardaba notables parecidos y por supuesto diferencias con la violencia de los años cincuenta y con la situación actual del Pacífico en varios sentidos. Por ese entonces, el país experimentó tanto una dinámica de guerra como las secuelas de la que fue la última y más devastadora de las guerras civiles decimonónicas, la de los Mil Días y su más dolorosa consecuencia, el sentimiento por la 'perdida' de Panamá, además de un clima generalizado de confrontación política y revanchismo político que mostraría sus alcances en las décadas posteriores y sobre todo durante la violencia de los años cincuenta. No obstante las diferencias de épocas y conflictos, la principal similitud que encontramos entre estos tres momentos, radica en los efectos de realidad e irrealidad a que dieron pie los sucesivos eventos de crueldad y violencia, que hicieron que se traslaparan unas dinámicas con otras y que se encubrieran dramas específicos dentro de visiones generales acerca de lo acontecido.

En efecto, hace un siglo la relación Estado y nación, léase políticas e imaginarios colectivos, configuraba para los territorios de frontera del país una situación singular, en la que coincidían representaciones sobre *lo natural y lo salvaje*, que permiten explicar porqué se pasó de una situación de permisividad y complicidad estatal en esos territorios en torno a la extracción del caucho, a un estado enfermizo de genocidio-etnocidio perpetrado contra las comunidades indígenas, todo ello en medio de la desinformación e indolencia nacionales.¹² Pero cuando poco después las cosas se plantearon como conflicto internacional, a la luz de una supuesta racionalidad política, es decir, desde una relación *Estado y territorio* o entre Colombia y Perú por el control del trapezio amazónico y

¹² Sobre este enfoque véase el trabajo de Taussig (2002) y su ampliación y desarrollo al Pacífico en el de Wade (1997).

las regiones caucheras del Putumayo, se desató uno de los pocos momentos álgidos de nuestro tibio nacionalismo. Al tenor de la 'identidad nacional' manipulada por este clima de conflicto externo, se perfilaron y aceleraron los dispositivos para la integración material y cultural de regiones y pueblos fronterizos y se completó también el ciclo del efecto de realidad-irrealidad, porque en medio del entusiasmo reinante se tendieron nuevos velos sobre las dimensiones del drama que había antecedido a la guerra, sobre los actos de violencia, la historia de sus víctimas y los niveles de responsabilidad de los mismos, que hicieron derivar lo ocurrido hacia la brumosa esfera de la leyenda o la exageración.

Por esa época, las denuncias sobre la gravedad de lo que acontecía en los territorios amazónicos parecían calar más hondamente en el exterior que en el propio país y antes de que cualquier autoridad o institución central colombiana asumiera la gravedad de la situación, fue necesario que una comisión de la Cámara de los Comunes del parlamento inglés hiciera presencia en la zona del holocausto, para que la situación empezara a trascender. La presencia institucional y directa de los ingleses se puede explicar por varias razones. Por una parte, porque dadas las inversiones inglesas en las operaciones de la extracción y comercio del caucho, podía verse comprometida la imagen de la Corona británica ante el mundo. Por otra, en tanto se asistía a otro momento de la expansión de la economía-mundo (Wallerstein 1998) y a un cambio del discurso imperial frente al mundo colonial. En efecto, para esa época la presencia de los imperios en la periferia, prevalida ahora del optimismo sobre la condición humana, alimentado de la lógica racionalista y el triunfante modelo de la ciencia positiva, se planteaba otra relación política y comercial con el mundo colonial y sus recursos, superando los elementos referenciales de la expansión imperialista de la primera generación (Pratt 2001, Said 1996). Esta posición imperial, marcaba una diferencia sustancial con los precarios estados nacionales en la periferia y la semi-periferia que, como herederos del discurso imperialista de vieja data, fungían como obsecuentes agentes de los intereses externos. Esto explica por qué la comisión del parlamento inglés apeló entonces a los más elementales principios humanitarios y del derecho de gentes para develar parte de las atrocidades cometidas por la tristemente célebre Casa Arana del Perú y por 'empresas' caucheras colombianas en esos territorios y sus métodos etnocidas sobre la población indígena, todo ello llevado a cabo como una poderosa maquinaria de terror que invocaba la 'civilización' y el 'progreso' para legitimarse ante propios y extraños.

El Estado colombiano y el conjunto de la sociedad sólo tomaron el problema en serio cuando se vio comprometida la integridad y la soberanía del 'territorio nacional' en la frontera con el Perú, lo que condujo al estallido del conflicto bélico con ese país en 1930-1932. Por su parte,

la academia y los intelectuales progresistas de entonces, llegaron tarde a la cita con esa trágica historia y *La vorágine* (1923), la conocida novela de José Eustacio Rivera, ha quedado como testimonio de un grito desgarrado y solitario lanzado sobre la faz de la tierra y de sus conacionales. Apenas para finales de los sesenta pudimos contar con el primer estudio crítico que permitió empezar a desentrañar la profundidad de lo ocurrido, a relacionar acontecimientos, geografías contrastadas y gente de diversa condición. Ese es el aporte sustantivo del estudio de Víctor Daniel Bonilla (1969) sobre los pueblos indígenas del Valle del Sibundoy y el por qué del asalto a sus territorios y de la desestructuración de sus comunidades en nombre de la civilización y del progreso, como paso previo para controlar los entonces anhelados territorios amazónicos, como lo confirmarían en años posteriores los estudios al respecto de Taussig (2002), Domínguez (1985), Domínguez y Gómez (1990,1994), Fajardo (1996), Palacio (2001), Zarate (2001), entre otros.

De otra parte, cuando en 1962 una comisión especial creada para el efecto rindió el primer informe científico sobre la violencia en Colombia¹³, sus autores pudieron concluir que, exceptuando al Chocó, la violencia estuvo ausente del territorio del Pacífico colombiano y cuantificaron en 400 los muertos de esa región para el período comprendido entre 1949 y 1958 (Guzmán, Fals y Umaña 1963:291). Una de las partes del informe, que se refiere a la historia y geografía de la violencia, consignó lo siguiente sobre la dinámica del conflicto en lo que denominaron ‘otras regiones’, es decir, aquellas distintas a las que constituían su epicentro en el interior andino del país, y entre las cuales se encontraba el Chocó:

¹³ Este estudio tuvo un antecedente en la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, nombrada por la Junta Militar de Gobierno, con la anuencia del presidente electo Alberto Lleras, mediante el decreto N^o, 0942 de 27 de mayo de 1958. Sus miembros fueron: Otto Morales Benítez, Absalón Fernández de Soto, Augusto Ramírez Moreno, los generales Ernesto Caicedo López y Hernando Mora Angueira y los sacerdotes Fabio Martínez y Germán Guzmán. Durante ocho meses los miembros de la comisión viajaron por todo el país reuniendo materiales y evidencias. Buena parte de ese material sirvió de base para el estudio de 1962. En efecto, por una iniciativa de la nueva Facultad de Sociología (creada en 1959), de la Universidad Nacional de Colombia, que fue respaldada por la Iglesia Católica y avalada por el Gobierno Nacional, los tres autores se dedicaron a sistematizar y redactar dicho estudio. Le debo a la entrañable amiga María Piedad León, empleada-estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la idea de la reiteración de los sitios de la violencia en el Chocó y la sugerencia de volver al respecto sobre el libro de Guzmán, Fals y Umaña.

El Chocó es afectado por individuos o restos de cuadrillas de evadidos de Antioquia al intensificarse la acción de las Fuerzas Armadas. Llegan desde Dabeiba, Cañasgordas y Urrao a través de las montañas hasta los ríos Murindó, Arquía, Bebará, Bebarmá y Nauritá. De Urrao al Carmen serpea un camino que fue clave durante la lucha.

La violencia en este sector ofrece como características el incendio, el descuartizamiento y la trata de mujeres de que se habla más adelante. Por acción de las llamas desaparecen del todo o parcialmente Bojayá, Bebará (enero 19 de 1952), Las Cruces, Nauritá, Curadó, Napipí y El Carmen (las casas de 'La Hacienda' y la escuela del Roble). Descuartizados mueren en La Mansa (Carmen del Atrato), 4 campesinos y 2 niños de doce y catorce años de edad.

Además, la acción militar que perseguía a antisociales de Antioquia internados en la selva chocona, lesionó a muchos nativos que debieron emigrar a Quibdó y otras ciudades (Guzmán, Fals y Umaña 1963:95-96).

Pasma asumir que desde hace cincuenta años la guerra se desplaza del interior andino hacia el Pacífico para reproducir y ampliar un imaginario conocido: considerar a esos territorios y a sus pobladores negros e indígenas como tierra de nadie, sin Dios y sin ley, potencial y real botín de guerra, en gente y territorios. Por tanto, objeto de acciones de conquista, de imposición de lógicas de guerra como el racismo y el etnocidio, que en el pasado se revestían de legitimidad por razones partidistas o de Estado para 'restablecer el orden', como lo revela este informe de la comisión acerca de las modalidades de la violencia en el Chocó. Nótese el peso de modalidades como los 'incendios', los 'descuartizamientos', la 'trata de mujeres' y la literal destrucción de caseríos enteros y los consiguientes 'desplazados'. Para esa época, las conclusiones de los investigadores no podían ser menos desoladoras:

[...] la guerra entre los campesinos fue un hecho. Las fuerzas armadas, móviles por esencia, se marchan una vez alcanzados sus objetivos, dejando a los hombres de la ruralía entregados a una mutua vendetta inmisericorde dentro de sus comarcas.

El raciocinio es monstruoso, pero de una macabra elementalidad: los conservadores sostienen al gobierno que hace la violencia, luego deben ser aniquilados; los liberales hacen la revolución contra el gobierno conservador, luego deben ser aniquilados. Es la guerra a muerte (Guzmán, Fals y Umaña 1963:96).

Más adelante, y a manera de síntesis, al retomar las características sustanciales del conflicto en la región anotaron, aunque apenas tangencialmente, en tanto carecían de una perspectiva de la etnicidad en el análisis, algunas pistas al respecto:

En cuanto al Chocó, prácticamente marginado de la vida económica nacional, excepción hecha de la explotación de bosques y minerales, la violencia bajó a él de Antioquia, afectando las márgenes del Atrato, el Carmen del Atrato. Napipí, Nauritá, Urequí (Juradó, Cupica) y Quibdó (Bebará, Bojayá). Su pueblo, casi enteramente de raza negra, no produjo líderes durante el conflicto. Allí actuaron Juan A. Romaña en la región de Bojayá y Pablo Córdoba en las vertientes hacia Antioquia (Guzmán, Fals y Umaña 1963:137).

Sospechamos que los investigadores se encontraban cerca de la pista de una perspectiva étnica para observar los aspectos de la violencia de aquella época, como parece corroborarlo el siguiente pasaje de la obra:

Finalmente, debe tomarse nota de la episódica aparición de la violencia en la Costa Atlántica, donde sus gentes mulatas y negras (y en parte mestizas) pudieron defenderse fácilmente del contagio, quizá gracias a su naturaleza abierta, franca, amigable, y a su gran virtud de tolerancia. La región es eminentemente ganadera y en ella aparecen los latifundios más extensos del país (Guzmán, Fals y Umaña 1963:37).

La trata de mujeres en medio de la violencia o como expresión de ella a la que refieren los autores y según lo que documentan, remite a que los casos tienen que ver con territorios indígenas y mujeres indias. En efecto:

¿Qué decir de la empresa de crimen montada en el Valle y de las expediciones punitivas de la policía por las vegas del Símbola y Ríochiquito en el Cauca, quemando los ranchos de los indios? ¿Y del retén de Santo Domingo a donde en una poceta de la plaza lavaban públicamente indias desnudas para luego poseerlas? Esta fue la razón del asalto subsiguiente, como testificaron el capitán 'Terrible' y otros campesinos en fechas y lugares distintos (Guzmán, Fals y Umaña 1963:95).

Lo que este trabajo pionero en el tema ilustra y que debemos retomar ahora bajo nuevos parámetros de investigación, es la necesidad de reco-

nocer dos cuestiones diferentes aunque relacionadas en las dinámicas de la violencia. Por una parte, que las lógicas de los agentes armados eran completamente diferentes a las lógicas de los pacíficos pobladores de los territorios invadidos. Por la otra, que los primeros tenían la capacidad de desestructurar, en cuestión de instantes (tiempo corto o del acontecimiento), ritmos de vida, tejidos sociales, imaginarios colectivos y formas de relacionamiento social construidas a lo largo del tiempo por decenas de generaciones.

En nuestro caso, estas dos experiencias confirman que la “violencia del Estado es no sólo violencia cultural, política y física, sino que es también violencia sacralizada”, es decir, aquella que se ejerce desde el Estado, concebido como un sacro central, único e indivisible, que, por tanto, no permite pensar como válidos en la modernidad los territorios étnicos (Moreno 1994:148). En esa perspectiva, la experiencia de la etnicidad en Colombia parece estar atrapada en un continuo ideológico estatal y nacional que va desde el etnocentrismo de viejo cuño hasta el multiculturalismo declarativo actual.

Contexto y dinámica del conflicto armado colombiano y sus consecuencias para el Pacífico

La suerte de los grupos étnicos en el Pacífico respecto de la guerra parece haberse definido desde que, en razón de múltiples circunstancias, se definió también la dinámica global de la guerra que vive el país. En efecto, en el marco de una *guerra de movimientos, y prolongada* como la que se libra en Colombia desde hace varias décadas, e institucionalmente legitimada por unos como guerra de contrainsurgencia y por otros como guerra revolucionaria, las evidencias más recientes indican que la guerra sigue siendo irregular, pero que ha alcanzado proporciones e intensidad colosales.

En los últimos veinte años, la geoestrategia de las FARC consistió en superar su accionar constreñido a su *núcleo vital* e histórico, para extenderse y consolidarse hacia su *núcleo de influencia*, o periférico, y progresivamente llegar incluso hasta las *zonas de frontera*, donde su presencia era más débil o nula. En efecto, esta fuerza, una vez consideró que había consolidado su presencia en el *núcleo vital* en la Cordillera Oriental, incluido el objetivo de tender un cerco sobre Bogotá con la expectativa más o menos rápida de la ‘toma del poder’, decidió ampliar su capacidad operativa en el *núcleo de influencia* (Costa Atlántica, la Orinoquia y la Amazonia), y finalmente establecerse en las *zonas de frontera* (como el Pacífico), con la consiguiente dinámica de creación de los *frentes y bloques* respectivos. A partir de esta lógica, la guerra se ha convertido en *nacional*

y, al parecer, estaría entrando ahora en una fase de *urbanización* (lucha por el control de los barrios y ‘concentraciones subnormales’ y de sus corredores viales internos y externos), donde se presume que se resuelven o van a resolver los principales problemas de logística pura y dura (información, abastos diversos), y de respaldo político y reclutamiento.

Otros grupos insurgentes, como el ELN, parecen haber perdido capacidad autónoma para determinar sus estrategias y, en consecuencia, en lo fundamental dependerían de las estrategias de los otros tres principales actores enfrentados, FARC, paramilitares y Fuerzas Armadas del Estado.

En tanto la lógica militar del Estado colombiano ha consistido en ir a la saga de las estrategias de los grupos insurgentes, pues ese mismo hecho explica los pretendidos pasos que el aparato militar-institucional ha dado para lograr el control del territorio nacional, con la consiguiente instalación de nuevas bases militares o el fortalecimiento de las existentes y la definición de las zonas de operaciones en general. Pero hasta finales de la administración Pastrana, dados los acuerdos del gobierno colombiano con el de los Estados Unidos en torno a su política antidrogas, la lucha contrainsurgente y la lucha antidrogas eran estrategias paralelas y no integradas, como se constata en la concepción y manejo del Plan Colombia y en su fracaso como solución a una y otra problemáticas. En este punto, la administración de Uribe Vélez se basa en el anuncio de un cambio de estrategia contrainsurgente y antinarcóticos, que se supone será más integral y dura.

En tanto la lógica de los paramilitares o autodefensas por lo general responde sincrónicamente a los movimientos de los dos actores principales en confrontación, Fuerzas Militares y guerrillas, pues la resultante de todo ello es la situación a la que asistimos actualmente, una escalada de la confrontación militar y en varias dimensiones. Los rasgos fundamentales de esta dinámica se pueden describir así: la extensión del conflicto que alcanza a diario nuevos territorios que estaban antes al margen del conflicto; cada nuevo avance sobre territorios de conquista o disputa se realiza desplegando toda la experiencia acumulada en los episodios anteriores; con lo cual la intensidad de las operaciones de todos los contendientes está alcanzando grados de eficacia insospechados y de consecuencias funestas para la población civil involucrada, los pueblos tradicionales y los grupos étnicos. De acuerdo con lo anterior, es previsible que la espiral de violencia continúe imparable su dinámica de retroalimentación, porque este escalamiento implica que cada movimiento táctico obedece a pautas estratégicas muy elaboradas, es decir, que ahora se necesitan no sólo más contendientes, recursos y logística en las acciones para corresponderse con la extensión del conflicto, sino que cada vez va a haber más

población civil involucrada, más grupos sociales considerados incómodos por los intereses de los combatientes y mayores riesgos de actos de violencia contra ellos. Y de esta manera se ha llegado a lo que se ha dado en llamar eufemísticamente la *degradación del conflicto*, que para algunos reviste las características de una *crisis humanitaria* y para los afrodescendientes es un *drama colectivo*¹⁴, que empieza en los territorios étnicos y continúa en los sitios de destino del desplazamiento.

De acuerdo con lo anterior, la situación actual parece indicar otra tendencia nueva: una impresionante sincronía táctico-estratégica de prácticamente todos los niveles en donde se define la guerra. Por ejemplo, para el caso del Pacífico, que hasta hace poco tiempo era una *frontera* en esta guerra, en menos de una década devino en *espacio estratégico*, sobre todo en relación con los recursos y logística del conflicto. Según cálculos militares, el 70% de los recursos requeridos por las fuerzas irregulares, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, para librar la guerra contra el Estado, se movilizan actualmente por el Pacífico¹⁵. Esta tendencia y tipo de datos, plantearían la paradoja de que una frontera histórica y natural como el Pacífico hasta momentos muy recientes, estaría

¹⁴ Según Carlos Rosero (2002:551-555), el desplazamiento de los afrodescendientes se origina básicamente en los territorios históricos del poblamiento negro y, por lo general, los eventos se presentan inmediatamente después de que se les han otorgado los títulos colectivos a sus comunidades, como lo han denunciado CODHES y la Asociación Afrocolombiana de Desplazados (AFRODES). Sin olvidar que el desplazamiento también se asocia a las fumigaciones y su impacto ambiental, y que no sólo es interno sino que en muchos casos se orienta hacia Panamá y Ecuador. Llama la atención, a propósito del desplazamiento externo, que mientras en nuestro país es a duras penas registrado, medidas adoptadas o en discusión en países vecinos como Ecuador y Panamá, reflejan la magnitud de la situación en las fronteras. Según medios de información, el pasado 2 agosto de 2002 empezó a regir en el Ecuador la medida de cierre nocturno del Puente Internacional de Rumichaca, que durará 45 días en observación. Mientras tanto en Panamá, una iniciativa promovida por empresarios y que será tramitada ante la Asamblea Nacional, propone el retorno de los marines norteamericanos a su país y los cuales se habían retirado después de la entrega del Canal. De acuerdo con dicha iniciativa, además de reactivarse la base Howard, se crearían dos nuevas bases, una en Colón y otra en la zona del Darién, en la frontera con Colombia. *Semana*, septiembre 2-9 de 2002, Pp. 17.

¹⁵ El balance sobre geoestrategia de la FARC y los conceptos de núcleo vital, núcleo de influencia y frontera, así como el dato de los recursos que se movilizan por el Pacífico, fueron expuestos por un mayor activo del ejército, en una conferencia sobre la situación del conflicto colombiano y la política institucional de las fuerzas militares, en el marco del

siendo integrada a la dinámica nacional e internacional vía la guerra y el tráfico de ilícitos, en escasamente dos décadas, en que coinciden la expansión de la geoestrategia de la guerrilla más poderosa del país con la ingobernabilidad y falta de control de sectores significativos de la población y el espacio mundial con el fin de la guerra fría y la bipolaridad.¹⁶

La paradoja resulta tanto más dramática cuanto más se hace conciencia de que esta brutal integración de la región se produce, justamente, durante un período en el que sus gentes, negras e indígenas ampliamente mayoritarias, habían logrado darle forma a un proyecto étnico y territorial propio. En un poco más de una década, se recuperaron derechos ancestrales, se conquistó su reconocimiento étnico, por lo cual su proceso puede ser analizado desde la perspectiva de una identidad en transición de lo cultural a lo político. Es decir, que tiene muchas probabilidades de ampliarse, profundizarse y dotarse de una dimensión política, que permita en suma llevar a cabo, a través de este proyecto, su postergada inclusión en la nación y el Estado, pero a partir de su autonomía y de su capacidad de negociación con el Estado y el gran capital trasnacional. Lo que en otro lugar y con otros fines he analizado como el paso de la nación cultural (basada en la identidad y los territorios ancestrales) a la nación política (basada en la autonomía y el desarrollo propios en un contexto de negociación) (Almario 2001.)

La situación en cifras de los desplazados y su perspectiva

Las cifras que manejan las entidades responsables de este tema: Cruz Roja, Pastoral Social de la Iglesia Católica, Red de Solidaridad Social, CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), entre otras, no obstante las diferencias al respecto, que se explican por las distintas estrategias de recolección, tratamiento y proyección de la información, dan cuenta de una u otra manera de la dinámica descrita antes. En efecto, con base en documentación diversa, entre las cuales destaca un documento de la Red de Solidaridad Social en el que se presentan los avances en la creación de la Red Nacional de Información para

Programa de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el pasado 15 de agosto de 2002. Sobre decir que la manera como utilizo estos datos y conceptos es de mi entera responsabilidad.

¹⁶ Sobre esta relación entre crimen internacional e ingobernabilidad desde 1991, véase Patiño (2002). Por su parte, Rosero (2002) caracteriza la situación como de integración tardía y dramática de los afrocolombianos a la nación, a través de la guerra.

la Atención de la Población Desplazada (Red de Solidaridad Social, 2001), que técnicamente controla los subsistemas que están en operación, otro de la CODHES (2002) y diferentes denuncias de líderes étnicos afrocolombianos y periodistas, y trabajos de analistas y académicos, trataremos de establecer una relación entre lo que muestran las cifras y algunas tendencias previsible de mediano y largo plazo.¹⁷

El documento de la Red de Solidaridad Social sostiene lo siguiente sobre la disparidad de las cifras del desplazamiento forzado en el país:

Se ha vuelto un lugar común hablar sobre las diferencias en las cifras sobre desplazamiento forzado. Mientras que la Conferencia Episcopal de Colombia estima que en el periodo comprendido entre enero de 1998 y septiembre de 2000 cerca de 47 mil personas se encontraron en situación de desplazamiento, en ocho jurisdicciones eclesiásticas del país, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento estima en más de dos millones el número de personas desplazadas durante el periodo 1995-2000. Entre tanto el Conpes 3057 de 1999 estimó que, entre septiembre de 1995 y noviembre de 1999, 400 mil personas se vieron obligadas a desplazarse por hechos vinculados al conflicto armado (Red de Solidaridad Social 2001:5).

Sintetizando los datos de la Red de Solidaridad Social, tenemos que para el 2000 se presentaron 1.351 eventos de desplazamiento en los cuales tuvieron que migrar 128.843 personas, pertenecientes a 26.107 hogares. Esta cifra indica que ese año en Colombia, en promedio, se presentaron cuatro desplazamientos al día, y que cada día 352 personas se vieron obligadas a migrar, lo que equivale a quince personas cada hora. Al discriminarse entre eventos masivos¹⁸ e individuales de desplazamiento, resulta que 254 fueron eventos masivos (19%) y 1.097 fueron eventos de desplazamiento individual y familiar (81%), pero los efectos de los eventos masivos fueron mucho más letales porque pro-

¹⁷ El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) fue creado por la Ley 387 de 1997, como respuesta del Estado colombiano a la problemática del desplazamiento y su prevención. El Sistema está “constituido por el conjunto de las entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención integral de la población desplazada”. Véase el Artículo 5 de la precitada Ley.

¹⁸ El Decreto Reglamentario 2569 de 2000 define como desplazamiento masivo al que involucra a diez o más hogares y/o a cincuenta o más personas. Véase documento Red de Solidaridad Social (2001:12).

dujeron 115.328 personas desplazadas, es decir, el 93% del total nacional. Por otra parte, 322 municipios expulsaron población y 322 municipios fueron lugares de llegada. En total hay 480 municipios que se vieron afectados por el desplazamiento, de los cuales 158 son sólo de expulsión, 158 sólo de llegada y 164 presentan la doble condición. Además, se sabe que en 159 municipios se ha presentado más de un evento de desplazamiento al año.

De acuerdo con los datos de CODHES para el 2001, las personas desplazadas fueron 341.925, cifra que corresponde a 68.385 familias aproximadamente, lo que equivale a 39 personas por hora o 937 personas por día. En total, 586 municipios ubicados en 32 departamentos del país (94% exceptuando a Vaupés y San Andrés y Providencia) recibieron a estas personas forzadas a migrar (CODHES 2002).

No es el propósito de esta comunicación establecer todas las posibles conexiones e implicaciones de estas cifras, pero sí hacer énfasis en algunos elementos tendenciales.

Por ejemplo, algunos datos muestran inequívocamente la dinámica de desplazamiento del conflicto hacia el Pacífico en su conjunto, en sus dos regiones, Chocó y Sur. En efecto, entre los 37 municipios que expulsaron el 75% de la población en el 2000, se encuentran 8 ubicados en el Pacífico biogeográfico. Del Chocó: Medio Atrato (3.289), Ríosucio (3.155), Quibdó (2.792), El Carmen de Atrato (1.616) y Juradó (1.287); Antioquia: San Juan de Urabá (2.740), Mutatá (1.596); Valle del Cauca: Buenaventura (3.800).¹⁹ Si se suman sus porcentajes individuales, se obtiene una cifra que representa el 16,30% del total de dicho cuadro.

Por otro lado, 31 municipios recibieron el 75% de la población desplazada en el 2000²⁰, y entre ellos se encuentran los siguientes del Pacífico: Quibdó (5.335) y el Carmen de Atrato (1.447) en el Chocó y Buenaventura (1.907) en el Valle del Cauca. Entre los tres hacen el 6,74% del total de dicho cuadro, pero sólo Quibdó recibe el 4,14%, contándose entre los cuatro municipios que más reciben desplazados en el país.

Otras cifras que consideramos relevantes son las de la composición étnica y por sexo de las personas desplazadas en el 2000. De las 60.341 personas de las que se conoce su edad, el 46% es menor de 18 años. “En resumen, y extrapolando las cifras de menores de 18 años y el porcentaje de mujeres al universo de la estimación, 128.843 personas,

¹⁹ Véase Cuadro 5, Red de Solidaridad Social (2001:14).

²⁰ Véase Cuadro 6, Red de Solidaridad Social (2001:15).

se estima que el 71% de la población desplazada (91.968 personas) corresponde a mujeres y menores de 18 años” (Red de Solidaridad Social 2001:17-18).²¹

Estas cifras se relacionan directamente con el tema de las modalidades de la violencia y de las características de sus víctimas o personas que son objeto de las acciones de fuerza. Su examen detenido, que aquí sólo podemos esbozar, debe apuntar a reconocer la lógica interna que subyace a la acción violenta, como lo sugieren los estudios sobre guerras y conflictos recientes en distintos lugares del mundo. Especialmente el caso de la ex Yugoslavia, muestra que los actos de violencia apuntaban directamente a la filiación étnica y al sexo de las víctimas, como una manera de redoblar su “[...] coeficiente de eficacia ideológica, si puede decirse, que permite apuntar al enemigo colectivo en tanto que colectividad capaz de reproducirse” (Nahum-Grappe 2002:70). En el caso del Pacífico, cabe preguntarse si con variables esta modalidad de violencia también se está dando, como lo indicaría el hecho de que los sujetos mayoritarios del desplazamiento sean los jóvenes y las mujeres, sectores en los que precisamente se cifran buena parte de las esperanzas y expectativas de reproducción étnica y social de las comunidades.

Las cifras más confiables en cuanto a la composición étnica de los desplazados en el 2000 indican que, de las 53.280 personas sobre las que se conoce su etnia, el 19% (10.100) corresponde a la población afrocolombiana y el 3% (1.542) a población indígena.²² Sin embargo, la tendencia es que estas cifra se incrementen, como lo subrayan los editores de un libro colectivo que, con base en los datos de la Red de Solidaridad Social para el segundo semestre del 2000, estiman que el 30% de los desplazados nacionales eran afrocolombianos (Mosquera, Pardo y Hoffmann 2002: 39).

En la actualidad no es suficiente con reconocer la impresionante eficacia de estas tecnologías de guerra, que la información morbosa de los medios se regodea en relevar, se hacen necesarios esfuerzos serios de análisis que permitan evidenciar que los actos de fuerza son portadores de lógicas internas, que no pertenecen al ámbito de lo demencial y que es precisamente por sus modalidades y efectos de mediano y largo plazo desde donde pueden ser develados, por su capacidad de destrucción del capital social y simbólico de comunidades enteras.

Esta capacidad desestructurante es posible por el evento en sí mismo, por sus consecuencias letales y, sobre todo, por las lógicas en que se basa

²¹ Véase Cuadros 10 y 11, sobre composición por género y etárea, Red de Solidaridad Social (2001:17-18).

²² Véase Cuadros 12 y 13, Red de Solidaridad Social (2001:19-20).

y que luego se desarrollan con autonomía e independientemente del acto de fuerza. Después de un acto de violencia, por lo general inédito en esas proporciones y modalidad, en el ambiente colectivo se instalan el rumor, la inseguridad, el dolor, el desconcierto, el miedo, la sensación de indefensión, que se vuelven casi totales e irrecusables. Pero como si esto fuera poca cosa, lo más grave consiste en que el proceso de *alienación colectiva* que estas acciones de guerra desatan requiere de otros componentes que completen el efecto de realidad-irrealidad, para lo cual es necesario modificar drásticamente la situación social preexistente en dos dimensiones fundamentales. De una parte, por la *deshumanización* que provocan, a través de la producción de nuevos sujetos sociales, de otros rostros, ‘voces’ e interlocutores, necesariamente fantasmagóricos e irreconocibles para los pobladores originales. De otra, por la *desterritorialización* que generan, con el diseño de una nueva geografía política sin antecedentes en estos territorios, es decir, mediante la configuración de un nuevo paisaje, otros circuitos de circulación y su diferente representación. En suma, por su capacidad de producir *gente desterritorializada y territorios sin gente*, que les garantice a las máquinas de guerra operar sin obstáculos.

Por eso el fenómeno que mejor describe este desolador panorama es el de la necesidad de desalojar los territorios de población, literalmente de vaciarlos por la fuerza, el llamado *desplazamiento forzoso* y sus sujetos sociales correspondientes, *los desplazados*; o, en su defecto, el sometimiento a estas lógicas de aquellos que se quedan, que para los efectos es exactamente lo mismo, porque los que por una u otra razón optan por quedarse o retornar en condiciones de indefensión, ya no son los mismos ni volverán a ser lo que eran antes del evento de fuerza.

En plena construcción de la Unión Europea, los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia obligaron a instituir un Tribunal Penal Internacional para juzgarlos, lo que no resuelve el problema ético y político de fondo, pero al menos permite discutirlo con seriedad. Los crímenes recientes cometidos en el Pacífico colombiano y otros territorios étnicos, como el Cauca indígena, ¿no ameritan acaso la pertinencia de este mecanismo para juzgar los etnocidios, genocidios y masacres? *Tribunal Penal Internacional inmediato para juzgar los crímenes contra la población civil y los grupos étnicos en el Pacífico y otros territorios étnicos*, puede ser una consigna viable en las actuales circunstancias?²³

²³ Soy consciente de que esta posibilidad tiene dos implicaciones fundamentales: en lo interno, puede afectar cualquier perspectiva de nueva negociación política entre el Estado y las fuerzas irregulares implicadas en la guerra interna; en lo externo, la presión de Estados Unidos para que Colombia se comprometa a abstenerse de acusar y juzgar a personal norteamericano ante los tribunales internacionales.

El Pacífico: de región de refugio a espacio de inseguridad

El cambio radical que presentan los territorios del Pacífico respecto de la seguridad de sus pobladores negros, indígenas y mestizos merece una cuidadosa atención por parte del Estado, sus instituciones, de la academia y la comunidad internacional.

Un estudio, que plantea la relación entre el espacio geoestratégico contemporáneo de América Latina y el ambiente, concluye que desde 1930 se asiste a un fin de la ilusión colectiva de preservar a la región “[...] como un conjunto territorial con extensos espacios virtualmente vírgenes y recursos naturales ilimitados” (Cunill 1996:9). Al analizar el proceso que conduce al paisaje latinoamericano actual, el autor llama la atención acerca de cómo éste contrasta con aquellas imágenes que nos dejaron las miradas de viajeros y estudiosos de las primeras décadas del siglo XX, que se aventuraron por fronteras naturales consideradas hasta hace poco como inexpugnables. De tal forma, que ha llegado el fin de los espacios latinoamericanos ilimitados e inextinguibles y existen suficientes evidencias de que incluso ya ellos han dejado de actuar como las imbatibles barreras naturales que tuvieron el poder de poner a raya a los depredadores modernos de los recursos naturales (Cunill 1996:15 y ss).

Esta tendencia se constata en el Pacífico colombiano, como lo confirma un rápido ejercicio de comparación entre las primeras representaciones sobre la región Pacífica a principios del siglo XX, las que nos dejaron Triana, Merizalde, Yacup y West, y la patética situación actual de la región. No hay duda de que los paisajes naturales han *retrocedido* en esta región y que la explotación maderera ha sido en tiempos contemporáneos, con seguridad, la principal razón de este retroceso del paisaje natural (Cunill 1996, Leal y Restrepo 2003). Para uno de estos investigadores, la deforestación y los problemas ambientales y portuarios flagelan la región entera y calculaba para 1992 en 160.000 las hectáreas deforestadas por año en el Pacífico colombiano (Cunill 1996:37); promedio que no sólo no se ha detenido sino que se ha profundizado hasta la fecha y año tras año.

La cordillera Occidental, la selva húmeda tropical del Pacífico y la escasa vocación hacia las actividades y asentamientos en este océano, impusieron condiciones para que históricamente su acceso fuera difícil desde el interior andino, por lo cual fue a duras penas asequible por trochas y caminos informales, terrestres o acuáticos, trasegadas sólo por conocedores y aventureros. De esta forma su territorio se mantuvo en general incólume hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando fue horadado por las vías modernas de acceso hasta los puertos de

Buenaventura y Tumaco. No obstante que sus recursos naturales fueron explotados históricamente mediante el modelo extractivo y que este dio origen a sucesivos, intensivos pero efímeros ciclos productivos (oro, tagua, caucho, Carey, pieles) durante la colonia y a lo largo del siglo XIX, su paisaje permaneció esencialmente inalterado. Estas circunstancias permitieron las exitosas estrategias de adaptación de la gente negra en libertad tanto a los ecosistemas diversos del bosque, el río y el manglar como a la tenue modernización, a través de la construcción de territorios e identidades que se soportaron en las sociedades locales. Incluso, aunque los más contemporáneos y agresivos ciclos del oro, la pesca, el mangle, la madera y el palmito, trastocaron más drásticamente los ambientes y las sociedades locales, las gentes negras e indígenas siempre encontraron formas para sobrevivir y reproducir sus sociedades y comunidades (Arocha 1999, Del Valle y Restrepo 1996, Leal y Restrepo 2003, Villa 1998).

Como lo demuestra el estudio de Leal y Restrepo (2003) sobre la explotación maderera en el Pacífico colombiano en el siglo XX (al igual que los anteriores en la colonia y el siglo XIX), sus ciclos extractivos, no obstante lo impactantes que resultaron para la sociedad regional, pudieron ser asimilados como experiencias colectivas por la gente negra, básicamente por las características particulares de dicho modelo y las peculiaridades de la sociedad regional. En efecto, considerando que la economía extractiva ha sido la constante histórica de estos sucesivos y febriles ciclos de explotación de los recursos vegetales y minerales de la región, es necesario desentrañar su dependencia de condiciones ambientales y sociales. Por un lado, el modelo ha dependido desde siempre y por definición del aprovechamiento de la oferta ambiental diversa de los productos respectivos hasta su agotamiento. Por el otro, depende del uso de una mano de obra barata, disponible y conocedora de los entornos y tecnologías correspondientes, por lo cual las sociedades locales pudieron mantener a raya potenciales competidores externos como fuerza laboral y los concomitantes fenómenos migratorios significativos. De acuerdo con estos autores, se puede concluir entonces que, entre la lógica del modelo económico extractivo y las lógicas de las sociedades locales, se estableció un equilibrio de fuerzas que permitió la viabilidad del primero pero sin implicar un alto costo de desestructuración social para las segundas. Este es otro de los tantos rostros de la versatilidad de estas sociedades negras, que adaptaron los ritmos cotidianos de sus sociedades locales a las demandas del modelo extractivo, sin que ellas se desestructuraran significativamente, reteniendo partes esenciales de su distinción y singularidad histórica y su proyección hacia el presente.

La vitalidad de los paisajes naturales latinoamericanos contribuyó incluso a forjar parte del imaginario y mitología revolucionarios, bajo el

supuesto de que la revolución fluía desde los ‘paisajes de refugio’ hacia los centros del poder (Sierra Maestra en Cuba, regiones de los Andes peruanos para Sendero Luminoso, ciertas zonas del interior andino de Colombia para las FARC, el ELN, el EPL y otros grupos), en los que se asociaban paisajes naturales con paisajes culturales desde una matriz romántica, que exaltaba a los grupos humanos en ‘estado de naturaleza’. Con el retroceso de los lugares de refugio también se han derrumbado los imaginarios románticos.

Tal vez las siguientes anécdotas ilustren esta idea de la radical transformación de los espacios de refugio en espacios de inseguridad en el Pacífico. Porque algo va, sin duda, de lo que evoca la propia tradición popular en Tumaco sobre un mítico guerrillero refugiado allí y la situación actual de desplazamiento forzoso de los afrodescendientes hacia el interior del país. En efecto, la gente cuenta que cuando Jaime Bateman Cayón era uno de los hombres más buscados del país, él acostumbraba solazarse con los hermosos atardeceres tumaqueños, mientras caminaba para recibir el viento marino o contemplaba el majestuoso ficus que preside el Parque Colón. Algo va también de la aventura épica del *Karina* y las acciones militares del M-19 con sus ‘entradas’ por el Pacífico en la década del ochenta, recreadas por los relatos de Germán Castro Caycedo, a la situación actual.

La paradoja es que ahora son los pobladores ancestrales de estos territorios los que deben buscar refugio en el interior del país, con la consiguiente y brutal degradación de sus condiciones de vida, dignidad e identidad. En resumen, hasta hace poco se concebía al Pacífico como un espacio para realizar incursiones de paso de proyectos revolucionarios o delincuenciales, mientras que las evidencias recientes constatan la instalación en la región de la impresionante y sincronizada maquinaria de guerra que masacra, desplaza y desterritorializa a los grupos étnicos, negros e indígenas, del Pacífico colombiano. Pero estos cambios también ponen de presente que del imaginario romántico y revolucionario del ‘buen salvaje’ con el que fueron vistos campesinos, indígenas y negros que habitaban los lugares de refugio, ya no queda nada o muy poco.²⁴

²⁴ Los datos consolidados de los autores de los desplazamientos indican algunas diferencias todavía importantes, ya que: “[...] muestran que el 58% de los desplazamientos es causado por los grupos de autodefensas, el 11,26% por las guerrillas, el 0,13% por agentes armados del Estado y el 30,51% por más de uno de los actores armados. Estas cifras muestran que la acción de las autodefensas causa más de la mitad de los desplazamientos” (Red de Solidaridad Social 2001: 22). Al contrastar estos datos con la información por eventos de desplazamiento (Cuadro 15 y Gráfica 3) se concluye que: “[...] si bien los grupos guerrilleros acuden con más frecuencia al desplazamiento de población no armada

En el caso colombiano, los ‘espacios de refugio’ se han trocado en ‘espacios de inseguridad’ donde campean el genocidio, el etnocidio y todas las modalidades de la violencia. Los Farallones de Cali sirven actualmente de base para incursiones de paramilitares sobre las poblaciones de afrodescendientes e indígenas en el Pacífico y para acciones de la guerrilla sobre la población civil en Cali. La geográfica e histórica diferenciación y relación entre *sierra*, *pedemonte* y *llanura aluvial* en el extremo sur del Pacífico, que señaló tanto las fronteras étnicas, culturales y geográficas como las variables de los intercambios; en el contexto actual se erige en desventaja, al facilitar la movilidad de la guerra por el control de los enclaves fundamentales: Barbacoas en el piedemonte, la carretera Pasto-Tumaco y sus asentamientos más modernos en la llanura aluvial, el sistema hidrográfico con sus pobladores ribereños ancestrales y la línea costera y sus poblaciones pesqueras, comerciales y portuarias. Algo similar se deriva de la singular configuración de Buenaventura, en tanto su tardío acceso desde el interior (primero por vía ferrea y después carretera) lo definieron como el puerto de los cafeteros y azucareros y el sifón de esas economías, no obstante responder a unas condiciones históricas, sintetizar la formación regional y estar emplazado en medio de una geografía inhóspita. Las mismas condiciones que actualmente explican su amplia zona rural, la vitalidad geoecológica y étnicosocial y de refugio de los ríos localizados al sur del puerto y que, paradójicamente, también facilitan las acciones de guerra contra sus pobladores ancestrales, negros e indígenas. Estas acciones de guerra buscan el control de la carretera de acceso desde el interior en el tramo Loboguerrero-Buenaventura, de la carretera vieja que unía a Buenaventura con Cali por el camino de Anchicayá y contar con rutas expeditas para las incursiones impunes de paramilitares y guerrillas, que ocurren desde 1996 ante la inactividad estatal para impedir las.

De esta manera, territorios étnicos, parques nacionales y ecosistemas frágiles, han dejado de ser paisajes de refugio de la gente que los habita de antiguo, para convertirse en espacios de inseguridad y violencia. Como lo confirma el desplazamiento de las comunidades afrocolombianas e indígenas y la despoblación de sus consejos comunitarios y resguar-

como estrategia para desocupar poblaciones y avanzar en el control territorial, las acciones de los grupos de autodefensa parecen tener un nivel de incidencia más alto en tanto desplazan mayor número de personas mientras en las acciones de la guerrilla se desplazan, en promedio, 24 personas, en las acciones de grupos de autodefensa se desplazan 154 personas” (Red de Solidaridad Social 2001: 22). No obstante, acciones como las que condujeron al etnocidio-genocidio de Bojayá, que apuntan a la responsabilidad de las FARC, muestran que en la dinámica actual estas diferencias pueden tornarse irrelevantes.

dos²⁵, el control de los parques nacionales por las máquinas de guerra²⁶ y la introducción de cultivos ilícitos en los ecosistemas del Pacífico.

La colisión de intereses en el Pacífico: espacio estratégico versus territorio étnico

Vistas así las cosas, las lógicas que subyacen a las acciones de unos y otros de los protagonistas de la guerra, no parecen responder a argumentos como la toma del poder o el impedirla, sino a una justificación de la guerra por su propia dinámica. En relación con el punto tratado antes, el objetivo militar de ampliar los paisajes de inseguridad lo que buscaría ahora es asegurar que ese cambio espacial sea una garantía de eficacia para las tecnologías financieras y logísticas de la guerra, por lo cual se hace imprescindible el control del territorio para el discurrir de todas las operaciones posibles.

La '*limpieza étnica*' que de hecho se está llevando a cabo en el Pacífico, se hace incomprensible con el uso de conceptos como *desplazamiento forzoso, desplazados y poblaciones desplazadas*, porque se generaliza con ellos una situación específica que, no obstante sus orígenes comunes, consecuencias compartidas y drama humano que implican, no es reducible. La cuestión tiene, en mi opinión, implicaciones conceptuales y sobre todo ético-políticas. Porque lo cierto es que los desplazados del Pacífico son *afrodescendientes e indígenas* y que sus territorios son *territorios étnicos*.

Una de las peculiaridades del actual desplazamiento de la guerra al Pacífico colombiano consiste, en lo que a su dimensión económica se refiere, en la superposición y competencia de modelos contrastivos y sus respectivos agentes: el modelo extractivo clásico de los agentes externos (nacionales y extranjeros), que se apalancó siempre en el paradigma etnocéntrico; el modelo alternativo de la gente negra, en el pasado de hecho y baja conciencia, en la actualidad en una fase de transición y con la esperanza del control territorial y desarrollo autónomo y el *modelo de nueva economía* que, aunque precede a la situación actual de guerra se ha acelerado con ella y en el que se entremezclan elementos del extractivismo clásico más 'salvaje', los ilícitos, delincuenciales y paraestatales con las expectativas del capital transnacional y el contexto global.

De estos tres modelos, el de *nueva economía* representa un cambio cualitativo en las condiciones económico sociales de la región, en tanto

²⁵ Para el 2001 se estimaba que los desplazados en el Pacífico colombiano ascendían a 40.000 personas (Rúa 2002:570).

²⁶ Según Cunill (1996:56-57), para 1992 el 48% de los parques nacionales de Colombia se encontraba tomado por las máquinas de guerra.

ya no se sustenta en el modelo histórico extractivo sino en uno nuevo y transformativo, con lo cual se anuncia el total trastrocamiento de las relaciones sociales en su conjunto, y de las étnicas y culturales en particular. Por ejemplo, las madereras, pesqueras, camaroneras y palmicheras que aún funcionan en Tumaco, Guapi o Buenaventura, o sus áreas de influencia, anunciaron hace unas décadas atrás este cambio, porque no se basan exclusivamente en el modelo de explotar los recursos naturales disponibles hasta agotarlos, sino que realizan ciertas transformaciones para asegurar la reproducción del capital, tales como la destrucción de bosques primarios de manglares para establecer sus complejos de siembra y producción, compra o apropiación de tierras, que suponen inversiones de mediano y largo plazo, entre otras.

Según pensamos, a la misma tipología de las industrias de transformación pertenece, aunque desde lo 'ilegal', el desplazamiento a la región del Pacífico sur del negocio de cultivo de coca, producción, procesamiento y distribución de cocaína y otros productos ilícitos. Las racionalidades en que se soportan estas iniciativas 'empresariales' son muy complejas en lo económico, político e ideológico. Por una parte, introducen un cultivo exógeno que no hace parte de la tradición agrícola de los negros ni de los indígenas, que altera profundamente los ecosistemas por la manipulación de químicos y fumigaciones o imponen ritmos de trabajo y valores sociales individualizantes y competitivos que, por otra parte, terminan por fracturar memorias y tejidos sociales basados en la solidaridad, la reciprocidad y los lazos de parentesco.

Estas prácticas, que se revisten en veces de iniciativas empresariales e inversiones, realmente hay que considerarlas como tecnologías sociales para provocar cambios súbitos y bruscos en las sociedades locales, en tanto inducen a los pobladores al cultivo de coca, aportan el 'plante' para 'arrancar' (semilla, insumos y dinero en efectivo para pago de jornales) y garantizan los compradores y los circuitos complementarios de distribución. En otros casos, con base en esta modalidad, se establecen verdaderos *complejos agro-productivos*, que están en capacidad de transformar la coca producida tanto en las tierras del Pacífico, que se han incrementado a pesar de la no tradición de la gente negra hacia este cultivo y las barreras edáficas que presenta el entorno, como la que llega a la región proveniente desde regiones muy lejanas, como el Putumayo, el Caquetá e inclusive el Ecuador. Pero es frecuente y en casos hasta generalizado, que estas prácticas se entrecrucen con otras dinámicas, como las de los grupos guerrilleros o paramilitares, que las asumen como parte de sus estrategias política, militar y logística.²⁷

²⁷ Mientras redactaba la versión final de esta comunicación, agosto 25 de 2002, distintos medios informaban sobre la destrucción de uno de estos complejos productivos, dentro de una operación del Ejército Na-

Puertos, carreteras y vías de acceso, los poblados y sus circuitos comerciales y de comunicación, los entornos todos, son espacios disputados palmo a palmo y a muerte con fines de procesamiento de cocaína, aprovisionamiento y camuflaje, caletas para armas, municiones e insumos, rutas expeditas para la movilización de drogas, armas y dólares. Hasta la más mínima de las acciones es considerada estratégica, porque de su éxito dependen la seguridad y estabilidad futura de los respectivos proyectos de dominio y control territorial. Y en estas lógicas, la gente no cuenta... o mejor dicho, cuenta como obstáculo o como facilitadora.

Pero sobre todo, con este modelo, exacerbado por la guerra, en la que todos sus componentes se retroalimentan unos a otros con base en la violencia, por primera vez se cierne una amenaza sobre la región que deja estrechos márgenes a la resistencia de sus pobladores, entre otras razones por el complejo contexto en que están inscritas estas dinámicas.

Desde las condiciones nacionales, porque se trata de una 'limpieza étnica' que vacía sus territorios ancestrales de comunidades reales y que políticamente tiene el efecto de golpear muy duramente el proceso de construcción autónoma de sus territorios y hacer retroceder a todos (movimiento étnico negro, Estado y sociedad) en los pasos que se habían dado hacia una salida inédita para resolver la secular cuestión de las relaciones entre etnias, Estado y nación en Colombia. Desde el contexto globalizado, porque por cuenta de la guerra y sus consecuencias, ahora es más fácil para el gran capital, los intereses transnacionales y el propio Estado y la sociedad colombianos, que se han reclamado siempre como los únicos interlocutores válidos frente a los primeros desconociendo a los grupos étnicos, imponer sus modelos de desarrollo en la región.

En poco más de una década, entre 1991 y el 2002, los afrocolombianos o afrodescendientes llevaron a cabo una tarea social de dimensiones colosales y de la cual no es plenamente consciente el país nacional, incluida la academia y, por extensión, tampoco la comunidad internacional. Dicha tarea se puede resumir en que se trata de una portentosa 'reforma agraria, étnica y social' en el Pacífico, en la medida que se legitimó con la Ley 70 de 1993 su control sobre los territorios ancestrales, lo que al tiempo

cional denominada Alto Mira, por el río de su nombre que desagua al sur de la ensenada de Tumaco. Según los militares, el complejo destruido se caracterizaba por las múltiples actividades que reunía, estaba situado en área donde opera el Frente 29 de las FARC, se presume que era propiedad de carteles del Valle del Cauca, contaba con 40 hectáreas cultivadas en coca y sus 'sofisticadas' instalaciones estaban en condiciones de procesar, almacenar y distribuir entre 6 y 10 toneladas de cocaína al mes.

entraña un profundo sentido de ingeniería e imaginación social para construir un territorio propio, que sirve de soporte simbólico y material a su identidad étnica resignificada, primero como 'comunidades negras' y más recientemente como 'afrocolombianos' y 'afrodescendientes' (Restrepo 1997, 2001). El éxito de la estrategia política que condujo a su nueva representación colectiva se basó en gran medida en que supo aprovechar las fisuras y ambigüedades discursivas de la tradición política nacional de corte integracionista en lo étnico, que se vio doblemente presionada al empezar la década del noventa: de un lado, por las nuevas tendencias globalizadoras, ecologistas y multiculturalistas y su necesaria expresión constitucional y normativa y, del otro, por la aguda crisis política e institucional colombiana. Pero hay que ser plenamente conscientes también de que este impresionante esfuerzo social se ha llevado a cabo, justamente, durante la década más violenta de la historia de Colombia, sin que fuera necesario recurrir a ella por parte de la gente negra e indígena, porque si por algo se caracterizan ambos procesos es por su dignidad y condición pacífica (Arocha 1992, Pardo 1997, Villa 1994, Wade 1996b).

En efecto, lo que no lograron prácticamente doscientos años de construcción de Estado-nación, democracia política e institucionalidad republicana, ni el Estado ni sus partidos históricos, pero tampoco los distintos proyectos de izquierda, incluidos los armados, todos ellos integracionistas en sus políticas hacia lo étnico y lo cultural; lo lograron las comunidades negras a lo largo y ancho del país y especialmente en el Pacífico en relativamente corto tiempo y sin violencia como quedó dicho. Hablamos de una década aproximadamente, si nos atenemos a los hitos demarcados por la aprobación de la Constitución Política de 1991 y los espacios ganados a partir de entonces por los grupos étnicos, pero ya sabemos que esto fue posible por su trasfondo histórico y cultural que se remonta a la aciaga historia de los transterrados como cautivos del África a América, para continuar aquí con su proceso de etnogénesis endógeno y su resistencia a la dominación, la opresión y la exclusión. Todo ello se plasma en la titulación colectiva para los afrodescendientes, la ampliación de las tierras de resguardo indígenas, la conciencia sobre los parques nacionales y los ecosistemas frágiles como los manglares, reclamados como territorios étnicos o de su influencia y en los procesos organizativos de tipo local, regional y nacional. La titulación colectiva tiene previstas 5 millones de hectáreas en todo el Pacífico colombiano para agrupar cerca de 300.000 personas y la dinámica actual y potencial de la aspiración de su control y manejo autónomo se soporta en 160 consejos comunitarios organizados y en el futuro del movimiento étnico afrocolombiano en su conjunto (Rua 2002:570-571). Si a los 5 millones de hectáreas bajo potencial control comunitario de los 'afrodescendientes' le sumamos los 5 millones de hectáreas de los resguardos indígenas y los parques nacionales, que están bajo la influencia

de estos grupos étnicos, estamos hablando de aproximadamente 10 millones de hectárea en todo el Pacífico colombiano. Un espacio significativo por sus dimensiones, el entorno en el que se inscriben, es decir, en una de las grandes últimas selvas húmedas tropicales del planeta, precisamente en un momento en que la discusión sobre el desarrollo sostenible y la pobreza a escala mundial se agudiza.²⁸

Después de este esfuerzo colectivo, promisorio para superar las condiciones de abandono y miseria seculares de la región, que tiene además el doble potencial de darles poder a ellos y de dotar al Estado y la sociedad de una política inédita para superar el integracionismo tradicional, se configura un drama y una paradoja para los afrodescendientes.

En tanto la lógica de la guerra que libran guerrillas y paramilitares contra el Estado depende fundamentalmente de tecnologías de guerra y provisión de recursos, al desplazarse al Pacífico, ha producido un golpe incalculable a las iniciativas de negros, indígenas y mestizos que allí conviven y a sus organizaciones y procesos específicos. En efecto, el capital social y simbólico invertido por estas comunidades en sus territorios y organizaciones desde tiempos ancestrales y sobre todo en la última década, está siendo sistemáticamente destruido y desestructurado por las acciones de guerra. Los territorios étnicos son irrespetados, sus organizaciones destruidas, sus activistas y voceros amedrentados o asesinados, comunidades enteras intimidadas, corrompidas, masacradas y desplazadas.

No obstante el acumulado histórico y actualizado de resistencias, adaptaciones e hibridaciones de afrodescendientes e indígenas para seguir siendo y reproducirse en el territorio, ha tenido que ceder terreno frente a una modalidad inédita de estos ataques contra ellos, que ha resultado ser la más agresiva de todas las conocidas hasta ahora: la guerra.

Por cuenta de la guerra se están transformando a diario los *afrodescendientes e indígenas en desplazados*, sus sociedades locales y comunidades en *poblaciones desplazadas* y lugares de espanto, sus territorios ancestrales trocados en espacios sin gente y esta en gente sin territorio. Las condiciones de su lucha étnica se han visto súbita y radicalmente modificadas, porque en lugar de dedicarse a fortalecer y ampliar los espacios ganados en la última década y su proceso organizativo, deben ahora responder a varios y desproporcionados retos, como son conti-

²⁸ Ese es el clima que preside las sesiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, reunida en Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002, para evaluar los avances alcanzados desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992.

nuar la lucha por su reconocimiento y autonomía, convertir el multiculturalismo declarativo en horizonte efectivo para un consenso con el resto de la sociedad nacional y sobrevivir al etnocidio-genocidio que ataca sin tregua en el corazón simbólico y material de su identidad, los territorios ancestrales y las comunidades.

Con razón Carlos Rosero (2002), uno de sus voceros nacionales, reflexiona sobre 'la desgracia de la buena suerte' que representa para los afrodescendientes el que su territorio ancestral sea un espacio estratégico para la guerra, para el Estado, para el gran capital trasnacional. Porque lo cierto es que con los desplazamientos de negros e indígenas en el Pacífico, la guerra ha devuelto las cosas a donde estaban antes de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993, es decir, de nuevo a los 'baldíos nacionales'. En efecto, del control étnico territorial que se venía ejerciendo progresivamente a través de los consejos comunitarios y resguardos, se ha pasado a cada vez más territorios vacíos para que en un primer momento las máquinas de guerra hagan expeditas las dinámicas funcionales al conflicto. Pero es previsible que después, con el advenimiento de una eventual 'paz', las multinacionales, los megaproyectos y las conexiones modernas previstas con el interior y exterior y sus agentes, ocupen el lugar que antes ocupaba la guerra, pero entonces los 'afrodescendientes' ya no tendrán el control real de sus territorios y tampoco la capacidad de negociación con el gran capital, el Estado y las multinacionales.

De las tendencias generales a la microescala del drama actual y a la esperanza de la resistencia

Un panorama general sobre este particular muestra cómo el Pacífico, devino de zona de frontera y esporádico lugar de paso y retaguardia, en espacio estratégico para la confrontación armada del país. Una reciente síntesis al respecto es suficientemente dicente:

Con la intensificación del conflicto, las selvas del Pacífico, con sus salidas hacia el mar, hacia Panamá y hacia el Ecuador, se convirtieron en territorios estratégicos para el contrabando de armas y drogas. Desde 1997, los paramilitares iniciaron una ofensiva tratando de bloquear el acceso de la guerrilla a los puertos de Turbo, Buenaventura y Tumaco, y a las zonas limítrofes aledañas. Primero trataron de desalojar a la guerrilla del río Atrato, y más tarde de las zonas aledañas a Buenaventura y Tumaco. Estas acciones implicaron el asesinato o el destierro de pobladores acusados de colaborar con la guerrilla y la retaliación aduciendo similares razones, de esta última contra otros civiles.

Así se produjeron las primeras oleadas de desplazados, que ocasionaron una tragedia social de inmensas proporciones y obstaculizaron el incipiente proceso organizativo del campesinado negro del Pacífico para la legalización y administración de los territorios colectivos aprobados por la Ley 70. Recientemente estos sucesos han culminado con la horrorosa matanza de más de un centenar de civiles afrocolombianos que trataban de refugiarse en la iglesia de Bojayá en el Atrato medio (Mosquera, Pardo y Hoffmann 2002:38-39).

En el Pacífico sur concretamente, esta dinámica general se presentó con los siguientes ritmos: inicialmente la lucha se entabló por el control de las vías de acceso a los puertos de Buenaventura y Tumaco y sus zonas inmediatas de influencia, en el norte y sur respectivamente y posteriormente la tenaza se cerró al extenderse la lucha hasta la costa caucana y sus ríos.

Pero la tendencia reciente de acontecimientos, eventos y acciones de diverso tipo, alertan sobre la relación entre el trasfondo de esta situación específica y los distintos matices de su evolución y formas de presentarse, al tiempo que sobre las maneras como se encadenan distintas dinámicas e intereses contrastados para alimentarse unas con otras, como lo constatan variadas evidencias en el Pacífico sur.

Durante varias décadas la intención de los narcotraficantes por establecerse y controlar lugares estratégicos del Pacífico precedió a la situación actual. En efecto, desde la época de esplendor del llamado cartel de Cali, se puso de presente la importancia creciente de la región y dichos grupos realizaron inversiones (desde los clásicos productos del modelo extractivo hasta renglones nuevos, como el turismo, la industria y el comercio) e hicieron uso de la corrupción política, para lo cual aprovecharon la tradicional estructura política local, como parte de su proceso de implantación en Buenaventura y Tumaco, principalmente. Todos estos movimientos, seguramente partieron de los cálculos acerca del futuro del negocio y posibilidades de sus operaciones, pero de cualquier manera se asociaban más con la dinámica de la economía de ilícitos que con movimientos pautados por una dinámica de guerra, como es el caso al que asistimos actualmente.

Desplazada la antigua estructura centralizada y autoritaria del Cartel de Cali por los resultados de la acción represiva gubernamental contra ellos, el interés por el Pacífico por parte del narcotráfico en su fase de nuevos y fragmentados carteles no sólo continuó sino que se acrecentó, pero con la novedad que la lucha por el control de corredores

claves y rutas de tráfico se hizo más despiadada y agresiva, lo que conllevó a una suerte de ‘interiorización’ de los principales centros poblados del Pacífico, en los cuales se impuso una lógica de conquista y competencia similar a la que ya imperaba en el interior del país. Se pasó así a la formación de bandas criminales organizadas, la proliferación de la piratería fluvial, marítima y terrestre, modalidades de ‘negocios’ mercenarios y al sicariato, que delatan una relación muy estrecha entre la región y los centros del interior andino, una especie de integración cultural de la criminalidad, que también implica la promoción de un modelo de vida exógeno y agresivo, que ha venido influyendo en cambios en las formas de expresión e identidad de los jóvenes.²⁹

Lo que importa ahora para los efectos de esta comunicación, es discutir la forma en que este modelo de nueva economía promovió modalidades socio-culturales inéditas en la región, que van desde el fomento de los cultivos ilícitos que aprovechan las condiciones de empobrecimiento de la gente, pasan por la formación de grupos delincuenciales y llegan hasta la formación de los complejos agro-productivos y el control de las rutas del tráfico internacional de ilícitos.

Desde 1997 y durante varias estadias en la región, he podido recoger evidencias que ilustran en parte este proceso y sobre cómo ha operado en varias zonas y ríos del Pacífico nariñense lo que llamo el engranaje o encadenamiento entre los diferentes proyectos en competencia y que más recientemente se asocia y redefine con el desplazamiento de la guerra al Pacífico. Según testimonios, en varias de estas zonas fue la guerrilla la que primero llevó la semilla de coca y ofreció el ‘plante’ económico para que los pobladores iniciaran el proceso productivo y ella garantiza también la cadena con los compradores. Estos traslapamientos y complementos entre proyectos diferentes son propios de la última década. Desde entonces los dirigentes étnicos evaluaban esta realidad, más que la presencia de los grupos armados en sí misma, como un peligro inminente para el proceso social de sus organizaciones en los ríos. Porque supusieron que con la interferencia de dichos grupos se perdería la autonomía de sus territorios, se produciría la de-

²⁹ La interacción entre fenómenos demográficos y culturales está siendo considerada últimamente por los investigadores, véase el estudio de Restrepo sobre los ‘aletosos’ en Tumaco (1999) y el trabajo colectivo de investigación realizado entre ORSTOM-Universidad del Valle acerca de las dinámicas migratorias desde la costa Pacífica hacia Cali y otros centros urbanos del país, que cuenta con una serie de investigaciones y particularmente con la de Urrea, Ramírez y Viáfara (2000). Para Bogotá, se ha realizado el primer estudio socioeconómico y cultural de los afrodescendientes que residen en la capital del país (Arocha 2002).

gradación del medio ambiente y la rápida monetarización de la economía regional, lo que, como si fuera poco, conlleva a fenómenos de competencia voraz, degradación moral y ruptura de los lazos de solidaridad que han prevalecido por centurias. Incluso esta situación condujo a que cuando se iniciaron las fumigaciones aéreas de las tierras cultivadas de coca en la región y previstas como acciones del Plan Colombia, que no hicieron más que agudizar en lo ambiental el drama social, las comunidades y sus voceros se encontraron divididos acerca de qué era lo más conveniente para ellas, aunque buena parte de esto quedara detrás de un silencio elocuente.

Según las previsiones de muchos dirigentes étnicos, los cultivos de coca y la implantación de esta economía traería muchas consecuencias negativas al proceso étnico y organizativo: las comunidades se irían detrás del espejismo de la monetarización descuidando la dinámica organizativa y se desatarían enfrentamientos entre los que optaran por esa vía y los que la rechazaban; vendría el deterioro del medio ambiente por una doble presión, la de las fumigaciones ‘desde abajo’ (las de los nuevos cultivadores) y las fumigaciones ‘desde arriba’ (por las operaciones por parte de los planes del gobierno concertados con la DEÁ) y el riesgo permanente de quedar en medio del fuego cruzado de intereses en torno a este negocio y las acciones gubernamentales y de los Estados Unidos.

Lo que vino después y hasta el presente es la constatación de estos temores: la lucha se hizo encarnizada por el control de las carreteras de acceso a los puertos de Buenaventura y Tumaco, entre guerrilleros y paramilitares y aún entre los mismos grupos guerrilleros, como la competencia que se entabló entre el ELN y las FARC por el control del piedemonte y la carretera Pasto-Tumaco; empezaron las tomas de pueblos o los cercos militares a los mismos, como en Barbacoas, Satinga, Mosquera, López de Micay, Timbiquí; se produjeron las masacres y desplazamientos en Naya, Yurumangüí, Anchicayá, zona de la carrera vieja en Buenaventura, Puerto Saija, Timbiquí; en el extremo sur, Tumaco se convirtió en centro de operaciones de todos los guerreros y sus asesores, incluidos los externos, flotillas de aeronaves de fumigación, de helicópteros artillados, de motonaves de control e interdicción se mueven constantemente, de día y de noche, por cielo y tierra, por el mar y los ríos.

Las acciones de guerra se acompañan de otras acciones tácticas y de movimientos, de tipo persuasivo o disuasivo, como las ‘visitas’ de los actores armados a las poblaciones y asentamientos ribereños o de los frentes de playa para anunciar su ‘presencia’, su ‘vigilancia’ o ‘protección’ sobre la población y efectuar las amenazas y advertencias del caso sobre eventuales auxiliares o colaboradores del bando contrario, con lo cual

la vida comunitaria está siendo intervenida y sus decisiones autónomas afectadas con argumentos como la previsión de posibles fortalezas o ventajas del enemigo. Desde otra modalidad se realizan labores de contrainformación y de sicariato en los núcleos más concentrados, como en Buenaventura y Tumaco. En este último, después de anunciarse por varios años y casi a la luz del día, finalmente los paramilitares pasaron del hostigamiento a la eliminación de dirigentes étnicos y personas y entidades solidarias con sus luchas, como lo testimonia el asesinato el 19 de septiembre de 2001 de Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social y una de las personas más comprometidas con el proceso de titulación colectiva de la región en general y de ACAPA en particular.

Otras de estas acciones —como el reciente secuestro masivo de varias decenas de empleados públicos de Cali de bajo rango y sindicalizados, que hacían turismo ecológico en la ensenada de Utría en Bahía Solano, Chocó— parecen enviar el mensaje de la capacidad operativa de estos grupos y buscan reforzar el sentimiento de indefensión en quienes se aventuren por el territorio en disputa.

Ahora bien, instalados en el siglo XXI, se imponen las preguntas y vaticinios sobre el futuro de la cuenca del Pacífico en general y de Colombia en particular, las cuales presentan rasgos notorios que es necesario subrayar, aunque en forma muy sucinta. Los expertos internacionales no parecen tener dudas acerca de que, con sobresaltos y azares condicionados por la inestabilidad del orden mundial, éste será ‘El siglo del Pacífico’ (Bell 1995) y, por lo general, en esa corriente se dejan ir los expertos económicos nacionales (Garay, Ramírez y Lombaerde 2000).

Sin embargo, en el caso del Pacífico que nos ocupa, no ha resultado fácil pasar del optimismo institucional (estatal y empresarial) sobre estas perspectivas a sus realizaciones. Buenaventura, el lugar clave para iniciar estos procesos, constituye el talón de Aquiles para el despegue de los mismos, erigiéndose en una auténtica ironía histórica. Los megaproyectos diseñados actualmente por los expertos con base en todas las previsiones de la economía mundial, se estrellan a la hora de su ejecución contra una densa realidad social de postración de la ciudad y del conjunto de sus actividades y de una miseria generalizada³⁰, que resume todas las consecuencias históricas de la integración de la región a los modelos extractivos y el diseño moderno del puerto como parte del modelo nacional de integración de la región, esto es, como un enclave de la economía nacional, con el subyacente desprecio por su población y cultura específica y por su biodiversidad.

³⁰ La tasa de desempleo hace rato sobrepasó el 80%.

La debacle tuvo su punto crucial en el pasado reciente cuando sobrevino el cambio de las reglas del juego social en torno al papel del puerto en la ciudad, la región y el país, en el marco de las tendencias de globalización e internacionalización de la economía. En efecto, como lo plantea con seriedad un analista:

En la práctica lo que ocurrió fue que el Estado reemplazó su intervención redistributiva en la ciudad, la cual se lograba a través de Colpuertos, por otro tipo de intervención económica en el puerto basada en la estructuración e implantación de los grandes macroproyectos que se requieren para modernizar el puerto, y orientados a lograr una eficiente imbricación de éste con el interior del país y con el mundo.

De esta manera, todo el esfuerzo del gobierno central se concentra en el puerto, en desmedro de la comunidad, que se siente dramáticamente excluida del proceso, ante la ausencia de mecanismos adecuados para irrigar en la ciudad los beneficios de la apertura económica y de la modernización de la infraestructura portuaria (Garrido 2000:216-217).

En un marco similar por su enfoque, habría que analizar la decisión de hace varias décadas atrás de establecer una moderna base militar en bahía de Málaga y la construcción de este complejo portuario-militar situado al norte de la bahía de Buenaventura, proyecto que estuvo inspirado en dos objetivos básicos: en lo interno, en que su acceso era más fácil desde el interior y una vez se completaran los proyectos al respecto, y en lo externo, en el supuesto de asegurar militarmente el litoral. Sin embargo, este proyecto no produjo ninguna ventaja cualitativa para el desarrollo regional y tampoco ha impedido el incremento de las actividades ilícitas (narcotráfico y contrabando) o el desplazamiento de la guerra interna hacia esta región.

Volviendo a la temática expuesta por el analista precitado, que dicho sea, confía en un ideal de modernización democrática, este se atreve a plantear una conclusión interesante y audaz, aunque incompleta por carecer de una perspectiva étnica en el asunto, como se desprende de su idea de ‘comunidad’, reducida a la ‘sociedad civil de Buenaventura’: “Por ese motivo es necesario y urgente la reconstrucción del destruido tejido social a partir de un nuevo acuerdo que, operando sobre nuevas bases, redefine y encauce las relaciones entre el Estado y la sociedad civil de Buenaventura” (Garrido 2000:237).

Los megaproyectos propuestos se pueden resumir en los siguientes: creación de la Zona Económica Especial de Exportación de Buenaventura y el complementario Proyecto Portuario de Aguadulce, con los cuales el puerto se colocaría en condiciones de atender las exigencias mundiales en esa materia, integrando una oferta de servicios portuarios, industriales, comerciales y ecoturísticos con una alta vocación exportadora; los otros proyectos se asocian básicamente con la llamada Malla Vial del Valle, que aspira a acercar toda región al resto del país e inclusive a Venezuela y Brasil, mediante una malla de carreteras y vías modernas y rápidas, que incluye la construcción de otro corredor hasta el puerto de Buenaventura, a través de Mulaló-Dagua-Loboguerrero.³¹

No obstante el optimismo ciego de la mayoría y el sentido crítico de unos pocos, no hay duda de que se trata del viejo modelo de desarrollo formulado ahora bajo nuevos moldes. Todos los modelos de desarrollo propuestos para Buenaventura desde que este puerto cobró importancia entre finales del siglo XIX y principios del XX y hasta la fecha en que en medio de su crisis sigue siendo el principal en movimiento portuario del país, han insistido en el eje de sus actividades portuarias, olvidando que esta sociedad y puerto son un precipitado de condiciones históricas que involucran los ecosistemas circundantes, el manglar, los ríos y el bosque, la adaptación a esos entornos de la gente negra e indígena, la formación de la región del Pacífico en su conjunto y su localización geoestratégica y cercana al Canal de Panamá.

Dos tendencias se entrecruzan entonces en relación con el futuro de la región y de su gente, porque mientras el Estado, el país nacional y las fuerzas desarrollistas decididamente globalizadoras insisten en un modelo para el Pacífico, que concibe la región como tributaria de la economía mundial, el proceso étnico en su esencial dimensión política supone el manejo autónomico del desarrollo que se soporta en el territorio propio.³²

En este contexto cobran pleno sentido los acontecimientos recientes ocurridos en los ríos localizados al sur del puerto de Buenaventura —que se cuentan entre los más bellos del planeta y que hasta hace poco

³¹ Para un conocimiento más amplio de estos megaproyectos, pueden consultarse los estudios de la Fundación Planeta Valle, creada en el 2000 por iniciativa gubernamental, privada y académica, para promover las ventajas comparativas de la región en el contexto mundial. (www.planetavalle.org)

³² Sobre estos temas que relacionan lo local y lo global, ténganse en cuenta los trabajos de Escobar (1997,1999), Escobar y Pedrosa (1996), Pardo (1997, 2001).

eran lugares de refugio para afrodescendientes e indígenas— y en donde las acciones de guerra contra sus pobladores parecen recordar la pesadilla del pasado y sustraernos de su consideración como fenómeno de la contemporaneidad, en la que perfectamente se pueden combinar las dinámicas propias de la guerra interna con aquellas que responden a la competencia global por espacios estratégicos.

En el pasado colonial, atraídos por las riquezas de los depósitos auríferos de estos ríos y después de sucesivos fracasos para someter a los indígenas, finalmente las iniciativas mineras de los poderosos clanes familiares de payaneses, caleños y bugueños se trasladaron a esta zona en la segunda mitad del siglo XVIII, dando origen al distrito minero del Raposo, cuyos ríos y placeres fueron laborados con base en mano de obra esclavizada.

La historia de los africanos esclavizados y de sus descendientes es todavía una historia desconocida, que en parte están haciendo visible los propios afrodescendientes con su proceso de afirmación étnica y con la recuperación de la tradición oral. Por ellos sabemos, por ejemplo, de la resistencia constante de los esclavizados del río Yurumangüí a las condiciones de dominio impuestas por esclavistas como los Valencia, los Mosquera, los Arroyo y los Castro; de sus prácticas libertarias como el cimarronaje y la formación de un palenque llamado el Desparramado. De la frustración que representó para ellos la guerra de Independencia y la continuidad de la esclavización, así como de los disensos entre ellos mismos en torno a las relaciones con los poderes centrales y sus agentes. De allí su resistencia a ser incluidos en las guerras civiles que tipificaron el siglo XIX y la construcción temprana de la república de Colombia, su marginalidad de un país extraño que no los consideraba parte de él y la necesaria afirmación en lo propio, en su dignidad, en el río, la familia y la comunidad.³³ Hasta que, en tiempos contemporáneos, toda esta tradición de resistencia se entroncó con la resignificación étnica, para hacer realidad, el 23 de mayo de 2000, mediante la resolución número 01131, emitida por el gobierno nacional, el título colectivo para el Consejo Comunitario del río Yurumangüí por 54.000 hectáreas.³⁴

Pero casi de inmediato empezaron las incursiones de centenares de paramilitares (AUC) provenientes de los municipios del norte del Cauca que colindan con el alto Naya, amenazando con efectuar masacres en el Naya y el Yurumangüí si sus pobladores no los abandonaban. El 10 de

³³ Véanse los trabajos de Mario Diego Romero, especialmente (1997a, 1997b, 1998, 2001a, 2001b).

³⁴ Con base en el mensaje de Naka Mandinga.

abril de 2001, en Semana Santa, se produjo la masacre del Alto Naya, donde fueron asesinados más de 100 indígenas, afrocolombianos y pobladores campesinos y se generó el virtual vaciamiento de su curso alto, medio y bajo. Dos semanas después y a pesar de las denuncias de las comunidades y entidades de apoyo sobre el peligro inminente, las cuales fueron desatendidas por las autoridades locales y nacionales, los paramilitares incursionaron de nuevo en la vereda El Firme, un caserío de pescadores ubicado en las bocas del Yurumangüí, donde descuartizaron con hacha a 7 miembros del Consejo Comunitario y provocaron el desplazamiento total de la comunidad, 450 personas hacia Buenaventura y otras 600 por el Yurumangüí. En agosto de 2001, una delegación canadiense visitó tanto el río Naya como el Yurumangüí y recogió los testimonios de los sobrevivientes de ambas tragedias.³⁵

Los afrodescendientes desplazados y su situación en los lugares de destino, en una escala local, es el último escenario que queremos observar, con el fin de registrar cómo en medio del drama se reproduce la esperanza y se apela a distintas formas de la resistencia y la dignidad. Lo de la escala local es porque esta mirada únicamente se refiere a Buenaventura como uno de los lugares importantes de destino de los desplazados y porque sobre esa experiencia disponemos de información pertinente.³⁶

Aunque la situación socioeconómica de Buenaventura es crítica, como ya se dijo, funciona el Comité de Apoyo a Desplazados, compuesto por la Red de Solidaridad Social, la Pastoral Social, la Cruz Roja y la Alcaldía, que desde lo institucional, se enlaza con las asociaciones de desplazados

³⁵ Comunicado de sectores académicos sobre los reiterativos actos de violencia en el Pacífico colombiano, dirigido en mayo del 2002 al presidente y vicepresidente de la República; Mensaje de Naka Mandinga y Declaraciones del XI Encuentro de Pastoral Afrocolombiana. Buenaventura, 18-22 de mayo de 2002.

³⁶ Con base en los informes mensuales de gestión, diferentes documentos de trabajo y reflexión y discusiones con funcionarios de CECAN, que ejecuta en Buenaventura un proyecto de desplazados de la Organización Internacional para las Migraciones-OIM: Proyecto de atención integral a personas desplazadas por la violencia en Buenaventura. Este proyecto, que se lleva a cabo desde septiembre de 2001 y ha llegado a más de 1.000 personas, cifra sus expectativas en 200 personas capacitadas laboralmente, 200 familias vinculadas a actividades económicas; en financiar iniciativas de empleo, autoempleo y generación de ingresos familiares y asociativos y acompañamiento y asesoría a estas iniciativas; nivelación escolar en lectoescritura y matemáticas; acceso a los servicios básicos de salud, recreación y jurídicos, a través de mediación con diversas entidades entre otros componentes.

(Asociación de Desplazados del Pacífico-ODP, por los desplazamientos ocurridos en la Carretera Nueva, Asodesplaz, Afrodes y Productores de San Marcos-Anchicayá) y entidades ejecutoras de proyectos. Por parte de la población, son visibles y actuantes las redes naturales de solidaridad, y familias enteras han acogido a sus familiares desplazados; es frecuente encontrar hogares comunitarios donde se alimentan y cobijan dos y hasta tres familias, en condiciones de miseria y hacinamiento, que ponen a prueba los límites de la solidaridad. Inclusive, campañas de motivación realizadas entre los vecinos de desplazados por este programa confirman la disposición de apoyo y solidaridad que existe en la población para con ellos. No sobra decir que Buenaventura representa históricamente un polo de atracción para la gente del Pacífico, porque se la identifica como 'parecida' a sus sitios de orígenes, al tiempo que progresista y cercana a Cali. Aparte de que en ella encuentran también las redes familiares extendidas, que prestan siempre un primer refugio y apoyo básico.

Aunque no existe un censo confiable del acumulado de desplazados en los últimos años, extraoficialmente se habla de unas 5.000 o 6.000 personas desplazadas en Buenaventura, que estarían en proceso de asentamiento permanente. Pero la ciudad constituye un reto adicional para los desplazados afrocolombianos, porque ha cambiado mucho por la fuerte inmigración desde el interior y por la crisis estructural que la ha empobrecido.

Los datos sobre los sitios de desplazamiento de las personas vinculadas o relacionadas con el programa de CECAN (unas 1000, aproximadamente) no dejan lugar a dudas sobre esta geografía del horror. La gente viene de los ríos y zonas cercanos a Buenaventura y algunos de sus porcentajes pueden ser ilustrativos: Anchicayá (32%), Carretera Nueva (16%), Naya (4%), Raposo (5%), Sabaletas (9%), Yurumangüí (1%), Puerto Merizalde, Aguaclara, Cisneros, Zaragoza, Punta Soldado (1%) y San Marcos de Anchicayá. Otros provienen de sitios más lejanos: López de Micay (10%), Iscuandé, Satinga (1%), Juradó (7%), Urabá antioqueño (1%) y Tulúa (1%). El 12% restante pertenece a personas provenientes de pequeños caseríos de distintos ríos.

Los datos de que el 1% de los desplazados son del Yurumangüí y el 4% del Naya son reveladores y su baja proporción en el conjunto se explica porque, no obstante que en esos ríos las atrocidades han sido agudas, reiteradas y que la amenaza de nuevos actos violentos no ha pasado, como quedó dicho, la gente y sus organizaciones se las han ingeniado para retornar y mantener el contacto con el territorio. Asumirse en Buenaventura como desplazados y al tiempo mantener vigente la memoria sobre el territorio y la comunidad, es decir, sobre su identidad, es una manera de resistirse al acto violento de que fueron objeto y es la experiencia más dolorosa por las que pasan estas personas.

Escindidos entre su identidad golpeada y la adaptación a las nuevas condiciones, estas personas logran finalmente un equilibrio que conmueve. Entre lo ofrecido por el proyecto de CECAN y las fases que la gente se ha dado parece existir un trasfondo. En efecto, en un principio, los usuarios optaron por los pequeños créditos y por preferir las ventas individuales sobre los proyectos asociativos y es apenas recientemente que empiezan a hacer uso de créditos más altos y a buscar la asociación productiva entre ellos. Aquí la cuestión del tiempo disponible para ellos y la asimilación de la experiencia dolorosa del desplazamiento marca algo muy interesante en relación con su identidad. Un ejemplo es el de las gentes del Anchicayá, que realizan actividades de autoempleo en lo que conocen, como la venta de frutas, pescado y chontaduro en Buenaventura, pero que al tiempo les dan libertad de movimiento para 'ir y volver', entre el territorio y Buenaventura. Esas idas y venidas (que son cortas, de 2 o 3 días) no tienen sólo una lógica económica, como visitar sus 'fincas' y 'terrenos' para recoger las cosechas de chontaduro o plátano para venderlas en la ciudad, sino también simbólica, al mantener un lazo con el territorio, con la memoria colectiva y con los lugares de pertenencia. En otros casos, estos movimientos son más largos y también más esporádicos (de por lo menos una semana y no continuos), como los que se hacen hacia el Raposo, Naya y Yurumangüí, a donde llevan pescado y de regreso traen chontaduro.

La utilización de sus saberes y pericias en las condiciones de Buenaventura tampoco resultan fáciles, porque las lógicas del mercado, de lo laboral y de la alternación de los ciclos productivos naturales y su beneficio, son más críticos y menos controlados por ellos. En efecto, un porcentaje de los desplazados se dedica a las actividades de pesca en Buenaventura, pero la veda que prohíbe la pesca con trasmallos y anzuelos, entre el 20 de enero y el 20 de marzo, agudizó su sobrevivencia en esos meses, sin que tuvieran a la mano las alternativas que sus entornos de origen sí les permitían.

En medio de estas paradojas del desgarramiento de tejidos sociales y su reconstitución, el fenómeno de los desplazados afrocolombianos en Buenaventura constituye un reto adicional para la institucionalidad y la sociedad toda. Superado el nivel de la asistencia humanitaria, en lo que falta mucho por hacer todavía, se debe llegar a las cuestiones de fondo y a su viabilidad. El Puerto, diseñado, usado y saqueado desde siempre, forjó una conciencia colectiva utilitarista, que las políticas nacional y local han reforzado, pero todas tienen en común el desprecio y la incompreensión del entorno y de las comunidades rurales que lo habitan de antiguo. La reconstrucción de las sociedades ribereñas es inseparable de la cuestión del futuro de Buenaventura y del puerto, ambos problemas se pueden y deben encarar haciendo un esfuerzo colectivo que convierta el

drama actual de unos y otros en una oportunidad para repensar el desarrollo de Buenaventura de manera integral, participativo e inclusivo.

A modo de conclusiones

En medio de la celeridad de los acontecimientos y la complejidad de la situación que se ha configurado en el Pacífico en los últimos años, tanto los académicos como los dirigentes étnicos realizan, a su modo y de acuerdo con sus respectivas pautas de trabajo y necesidades, esfuerzos notables por comprender su dinámica y sus características.

Restrepo, que parte de evaluar las posiciones de los investigadores en esta materia, señala cuál es el asunto de fondo en la actualidad y el cambio sustancial que se ha operado en la realidad: “Sólo hace diez años, los analistas consideraban al Pacífico colombiano un ejemplar paradigma de paz en un país desgarrado por la guerra y violencia (Agudelo 2000, Arocha 1998, Escobar en este volumen, Losonczy 1997, Wouters 2001)” (Restrepo 2002:1). Para este investigador, el hecho de que la región se mantuviera al margen del conflicto nacional y de su violencia generalizada, avalaba que pudiera ser considerada como un ‘remanso de paz’, según la expresión de Arocha (1993).

Lo que por otra parte reforzaba los argumentos de que esta situación se explicaba por la condición y calidad de sus pobladores ancestrales y sus dispositivos culturales, que garantizaban la vigencia de la tradicional manera como negros e indígenas han manejado la resolución de sus conflictos, como lo analiza Losonczy (Restrepo 2002:1).

Como es sabido, en el ínterin, el proceso étnico de los afrocolombianos logró avances significativos, pero las tendencias más recientes y la dinámica de la guerra, como hemos visto, evidencian que esa situación cambió drásticamente. Recientemente, reflejando en lo conceptual este cambio, los investigadores se cuestionan, entre otras cosas, las siguientes: por qué la relación entre etnia y violencia ha estado ausente de los análisis (Arocha 2000); someten a examen ese impresionante laboratorio social que es el Pacífico y donde se entrecruzan acciones y actores diversos (Pardo 2001); evalúan críticamente cómo la ‘celebración’ de los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia coincidió con la generalización de los eventos violentos contra los afrodescendientes y sus territorios (Mosquera, Pardo y Hoffmann 2002:13-42); y postulan que el Estado multicultural responde a un contexto global que aspira al control de territorios y recursos estratégicos, por lo cual constituye un nuevo modelo de subordinación, cuyos intereses van en contravía de los grupos étnicos

que intentan dibujar una nueva geografía política y otros términos en sus relaciones con el Estado y la Nación (Villa 2002:89-101).

Mientras tanto los afrodescendientes, sus voceros, organizaciones y comunidades, en medio del dolor, la incertidumbre y la rabia, han proclamado de nuevo que es la hora de la resistencia:

La defensa de los territorios y las comunidades de paz, las retornantes y las resistentes al desplazamiento, son una responsabilidad que debe cumplir el conjunto de las organizaciones afrodescendientes. Esta responsabilidad acarrea costos que deben asumirse abandonando la comodidad persistente de este ‘silencio parecido a la estupidez’, las pasadas de agache que muchos han mantenido hasta hoy y la subordinación de los intereses del conjunto a los intereses individuales y grupales. No asumir hoy la responsabilidad con el pasado y el futuro sólo contribuirá a hacer más difícil y doloroso el camino para las comunidades renacientes (Rosero 2002:558-559).

Falta que, convocados por su dignidad y coraje, todos aquellos que apoyamos las luchas de los afrodescendientes, hagamos también algo.

Bibliografía

Agudelo, Carlos

- 2000 “El Pacífico Colombiano: de ‘remanso de paz’ a escenario estratégico del conflicto armado”. Ponencia. Conferencia internacional *La société prise en otage, stratégies individuelles et collectives face à la violence – Autour du cas colombien*. Marsella, Francia.

Almario, Oscar

- 2001 Anotaciones sobre las Provincias del Pacífico sur durante la construcción temprana de la República de la Nueva Granada, 1823-1857. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*. 6: 115-161.

Arocha, Jaime (coord.)

- 2002 “Mi gente en Bogotá. Estudio socioeconómico y cultural de los afrodescendientes que residen en Bogotá”. Alcaldía Mayor de Bogotá-CES. Bogotá.

Arocha, Jaime

- 2000 “Etnia y guerra: relación ausente en los estudios sobre las violencias colombianas”. En: Jairo Tocancipá (ed.), *La formación del Estado nación y las disciplinas sociales en Colombia*. Popayán: Universidad del Cauca.
- 1999 *Obligados de Ananse. Hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano*. Bogotá: CES.
- 1992 Los negros ante la nueva Constitución colombiana de 1991. *América Negra*. (3): 39-54.

Bell, Daniel

- 1995 El Siglo del Pacífico. *Letra Internacional*. (41): 42-47.

Bonilla, Víctor Daniel

- 1969 *Siervos de Dios y amos de Indios*. Bogotá: 2a edición, Editado por el Autor.

CODHES

- 2002 “Desplazados en la encrucijada”. Informe. Bogotá.

Colmenares, Germán

- 1979 *Popayán: una sociedad esclavista. 1680-1800. Historia económica y social de Colombia*, Tomo II. Bogotá: La Carreta.

Cunill, Pedro

- 1996 *Las transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano, 1930-1990*. México: Fondo de Cultura Económica.

Del Valle, Jorge Ignacio y Eduardo Restrepo (eds.)

- 1996 *Renacientes del Guandal. “Grupos Negros” de los ríos Satinga y Sanquianga*. Bogotá: Biopacífico-Universidad Nacional de Colombia.

Domínguez, Camilo

- 1985 *Amazonia colombiana*. Bogotá: Banco Popular.

Domínguez, Camilo y Augusto Gómez

- 1994 *Nación y Etnias. Los conflictos territoriales en la Amazonia. 1750-1933*. Bogotá: Coama-Gaia-Fundación Puerto Rastrojo-Disloque.

- 1990 *La economía extractiva en la Amazonia colombiana, 1850-1930*. Bogotá: Corporación Colombiana para la Amazonía-Araraçura.

Escobar, Arturo

- 2004 “Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano”. En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds), *Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia*. pp 51-70. Popayán: Editorial Universidad del Cauca. Colección Políticas de la alteridad.
- 1999 *El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. Bogotá: CEREC-ICAN.
- 1997 “Política cultural y biodiversidad: Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano”. En: María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la modernidad*. pp. 173-206. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.

Escobar, Arturo y Álvaro Pedrosa (eds.)

- 1996 *Pacífico: ¿desarrollo o biodiversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. Bogotá: CEREC.

Fajardo, Darío

- 1996 “Fronteras, Colonizaciones y Construcción Social del Espacio”. En: Chantal Caillavet y Ximena Pachón (comps.), *Frontera y poblamiento: estudios de historia, y antropología de Colombia y Ecuador*, pp. 237-282. Bogotá: IFEA-Universidad de los Andes.

Garay, Luis Jorge; Doris Ramírez, Philippe Lombaerde (comps.)

- 2000 *El futuro de Colombia en la Cuenca del Pacífico*. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Garrido, Armando

- 2000 “Perspectivas del puerto de Buenaventura para el siglo XXI”. En: Luis Jorge Garay Salamanca, Doris Ramírez, Philippe de Lombaerde (comps.), *El futuro de Colombia en la Cuenca del Pacífico*. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Guzmán, Germán; Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña

- 1963 *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*, Tomo I, Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.

Leal, Claudia y Eduardo Restrepo

- 2003 *Unos bosques sembrados de aserríos. Historia de la extracción maderera en el Pacífico colombiano*. Medellín: Editorial de la Universidad de Antioquia.

Losonczy, Anne-Marie

- 1997 “Hacia una antropología de lo inter-étnico: una perspectiva negro-americana e indígena”. En: María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la modernidad*. pp. 253-277. Bogotá: ICANH.

Luna, Pablo

- 2001 Itinerario de un historiador. *Fronteras de la Historia*. (6):203-216.

Mandinga, Naka

- 2001 “Mensaje de Internet”. Diciembre 2.

Moreno, Isidoro

- 1994 “¿Violencia étnica o violencia de Estado?: nacionalismos estatistas, etnonacionalismos y minorías étnicas”. En: José Fernández de Rota (ed.), *Etnicidad y violencia*. Coruña: Universidade da Coruña-Servicio de Publicacións.

Mosquera, Claudia; Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.)

- 2002 *Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias. (150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ICANH-IRD-ILAS.

Nahoum-Grappe, Véronique

- 2002 Cultura de la guerra y contemporaneidad: ¿La ‘purificación étnica’ es una práctica ‘de otros tiempos’? *Nómadas*. (16): 64-74.

Palacio, Germán

- 2001 *Naturaleza en disputa. Ensayos de historia ambiental de Colombia, 1850-1995*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ICANH-COLCIENCIAS.

Pardo, Mauricio

- 1997 “Movimientos sociales y actores no gubernamentales”. En: María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la Modernidad. Identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia*, pp. 207-251. Bogotá: ICANH.

Pardo, Mauricio (ed.)

- 2001 *Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano*. Bogotá: ICANH-COLCIENCIAS.

Patino, Carlos Alberto

- 2002 “Crimen internacional e ingobernabilidad”, *El Mundo*, 24 de agosto de 2002, Medellín, pág. A/2.

Pratt, Mary Louise

- 2001 *Imperial Eyes. Travel writing and transculturation*, London-New York: Routledge.

Red de Solidaridad Social

- 2001 *Avances en la creación de la Red Nacional de Información para la atención de la Población Desplazada. Avances, componentes, metodología y cifras*. Bogotá: RSS.

Restrepo, Eduardo

- 2002 “Documental. Implicaciones del desplazamiento forzado y del conflicto armado en el proyecto étnico-territorial de las comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano”. Proyecto. Chapel Hill.
- 2001 “Imaginando comunidad negra: Etnografía de la etnización de las poblaciones negras en el Pacífico sur colombiano”. En: Mauricio Pardo (ed.), *Acción colectiva, Estado y etnicidad*, pp. 41-70. Bogotá: COLCIENCIAS-ICANH.
- 1999 “Territorios e identidades híbridas”. En: Juana Camacho y Eduardo Restrepo (eds.), *De montes ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia*, pp. 221-244. Bogotá: Fundación Natura-Ecofondo-ICANH.
- 1997 “Afrocolombianos. antropología y proyecto de modernidad en Colombia”. En: María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la modernidad. Identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia*, pp. 279-319. Bogotá: ICANH.

Romero, Mario Diego

- 2001a “Resistencias y construcción de libertad entre los afrocolombianos”. Ponencia. II Encuentro para la promoción y difusión del patrimonio folclórico de los países andinos. Influencias Africanas en las culturas tradicionales andinas. Santa Ana de Coro, Venezuela, noviembre 4 al 10.
- 2001b “Familias, economías y reconstrucción social en el Pacífico”. Ponencia. VI Cátedra Anual de Historia ‘Ernesto Restrepo Tirado’: Desde la marginalidad a la construcción de la nación. 150 años de abolición de la esclavización en Colombia. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 28-30 de noviembre.
- 1998 “Familia afrocolombiana y construcción territorial en el Pacífico Sur, Siglo XVIII”. En: Adriana Maya (ed.), *Los afrocolombianos. Geografía Humana de Colombia*, Tomo VI. pp. 103-140. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- 1997a *Historia y etnohistoria de las comunidades afrocolombianas del río Naya*. Cali: Imprenta Departamental.
- 1997b *Sociedades negras en la costa Pacífica del Valle del Cauca durante los siglos XIX y XX*. Cali: COLCIENCIAS-Universidad del Valle.

Rosero, Carlos

- 2002 “Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como alternativa”. En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), *Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias. (150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia)*. pp. 547-559. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/ICANH-IRD-ILAS.

Rúa, Carlos

- 2002 “Territorialidad ancestral y conflicto armado”. En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), *Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias. (150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia)*. pp. 561-572. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ICANH-IRD-ILAS.

Said, Edward

1996 *Cultura e imperialismo*. Barcelona: Anagrama.

Taussig, Michael

2002 *Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Urrea, Fernando; Héctor Fabio Ramírez y Carlos Viáfara López

2000 *Perfiles Socioeconómicos de la Población Afrocolombiana en Contextos Urbano-Regional del País, a Comienzos del Siglo XX*. Cali: CIDSE.

Villa, William

2002 “El Estado multicultural y el nuevo modelo de subordinación”. En: Jesús Aníbal Suárez (ed.), *El debate a la Constitución*, pp. 89-101. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ILAS.

1998 “Movimiento social de comunidades negras en el Pacífico colombiano. La construcción de una noción de territorio y región”. En: Adriana Maya (ed.), *Los afrocolombianos. Geografía Humana de Colombia*, Tomo VI, pp. 431-48. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

1994 “Territorio y territorialidad en el Pacífico colombiano”. En: *Comunidades negras: territorio, identidad y desarrollo*. Bogotá: PNR-ICANH.

Wade Peter

1997 *Gente negra. Nación mestiza*. Bogotá: Ediciones Uniandes.

1996a El movimiento negro en Colombia. *Revista América* 5 (93): 173-191.

1996b “Identidad y etnicidad”. En: Arturo Escobar y Alvaro Pedrosa (eds.), *Pacífico ¿desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*, pp. 283-298. Bogotá: Ecofondo-CEREC.

Wallerstein, Immanuel

1998 *El moderno sistema mundial*. (Tres volúmenes). México: Siglo XXI.

Wouters, Mike

- 2001 “Derechos étnicos bajo el fuego: el movimiento campesino negro frente a la presión de grupos armados en el Chocó”. En: Mauricio Pardo (ed.), *Acción Colectiva, Estado y Etnicidad en el Pacífico Colombiano*. pp. 259-285. Bogotá: ICANH-Colciencias.

XI Encuentro de Pastoral Afrocolombiana. Buenaventura.

- 2002 “Manifiesto de la Pastoral Afrocolombiana en los 151 años de la abolición de la esclavitud y la situación de violencia que se vive en las tierras de comunidades negras”, Buenaventura 21 de mayo.

Yip, Abraham

- 1993 *Buenaventura en la nueva era del cambio*. Cali: Imprenta Departamental del Valle del Cauca.

Zarate, Carlos

- 2001 *Extracción de Quina. La configuración del espacio andino-amazónico de fines del siglo XIX*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede Leticia-Instituto Amazónico de Investigaciones.